

# INFORME

**XIII VISITA ASTURIANA DE VERIFICACIÓN DEL ESTADO  
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA**

**MARZO 2017**



# **XIII VISITA ASTURIANA DE VERIFICACIÓN EN COLOMBIA**

**Estado de los Derechos Humanos  
y de los Acuerdos de Paz con las FARC**

**Informe del 2016**

**Visita realizada entre el 20 de febrero y el 5 de marzo del 2017**

***“Que la paz no nos cueste la vida”***

***“Estos valientes activistas están siendo silenciados por poderosos intereses económicos y políticos locales y regionales, así como por diversos grupos armados, incluidos paramilitares, por defender sus derechos o exponer la trágica realidad del país”.***

*Amnistía Internacional. Colombia: Repunte de los homicidios a causa de los ataques contra activistas en pleno proceso de paz de febrero/17*

**Fotos:** Delegación Asturiana, Jairo Vargas/Diario Público

**Autor:** 13 Delegación Asturiana

**Edita:** 13 Delegación Asturiana

**Imprime:** Paper&Color, S.L.

**D.L.:** AS-02193-2017

# ÍNDICE

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Presentación .....                                                                            | 5  |
| Situación de los Acuerdos de Paz con las FARC y de los Derechos Humanos en Colombia 2016..... | 8  |
| Estado de los Acuerdos de La Habana y del proceso de PAZ con las FARC .....                   | 8  |
| La Elvira, Buenos Aires/Cauca .....                                                           | 11 |
| La Fila, Icononzo/Tolima.....                                                                 | 12 |
| Situación de los Derechos Humanos en Colombia en el 2016 .....                                | 15 |
| 1. Ataques a sindicalistas y defensores-as de los Derechos Humanos. Protección .....          | 16 |
| 2. Ejecuciones extrajudiciales. DIH .....                                                     | 23 |
| 3. Paramilitarismo .....                                                                      | 24 |
| 4. Desaparición forzada de personas. Población en situación de desplazamiento.....            | 30 |
| 5. Personas privadas de la libertad. Torturas, trato cruel inhumano o degradante.....         | 31 |
| 6. Víctimas. Mujeres. Niños-niñas y adolescentes. LGBTI .....                                 | 32 |
| 7. Impunidad .....                                                                            | 34 |
| 8. Pueblos indígenas. Poblaciones afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales .....       | 36 |
| 9. Empresas y Derechos Humanos .....                                                          | 37 |
| 10. Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales .....                             | 39 |
| Conclusiones .....                                                                            | 46 |
| Recomendaciones .....                                                                         | 47 |
| Anexos: .....                                                                                 | 48 |
| Siglas usadas .....                                                                           | 48 |
| Organizaciones entrevistadas .....                                                            | 49 |



# PRESENTACIÓN

Queremos manifestar que ha sido un orgullo para nosotros haber sido invitados por segunda vez a participar en la misión de verificación del Programa Asturiano de Derechos Humanos en Colombia. En esta decimotercera edición recorrimos durante dos semanas una buena parte del territorio colombiano, visitando los Departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Santander, Tolima, Cauca y Cundinamarca, con el fin de escuchar en primera persona, ver y recoger los testimonios de quienes sufren las continuas vulneraciones de Derechos Humanos que pasan desapercibidas para la mayoría de los medios de comunicación.

Una realidad silenciada que oculta una cotidianidad de violencia estatal y paraestatal, de desplazamientos internos, de despojo de tierras, de asesinatos sistemáticos de campesinos, defensores de derechos humanos y líderes sindicales que según la Defensoría del Pueblo de Colombia suman un total de 120 desde que se firmaron los acuerdos hasta el 3 de marzo de 2017.

Detrás de todas estas estadísticas está el dolor real de decenas de miles de personas, objetivo de una violencia estructural al servicio de actores estatales y sectores económicos poderosos, ganaderos, palmeros, bananeros y hasta multinacionales que pretenden apropiarse de la riqueza natural colombiana sin las “molestias” que suponen los derechos de la población autóctona, la verdadera propietaria de la riqueza común del país.

Este año la visita era aún más importante porque coincidía con la implementación de los acuerdos de paz suscritos entre la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano. En este sentido, cabe anteponer nuestra preocupación al respecto de la decisión de la Corte Constitucional colombiana, que ha tenido lugar mientras se redactaba este informe y que interpone serios obstáculos a la implementación de los acuerdos de paz.

Una implementación ya de por sí frágil, como observamos en nuestra visita a La Elvira y La Fila, dos zonas veredales de concentración de las FARC para su desmovilización. Allí pudimos comprobar que por parte de las FARC el cumplimiento de los acuerdos se está produciendo según lo previsto. Sin embargo, hemos identificado la falta de operatividad por parte del Gobierno para cumplir con las condiciones y los tiempos estipulados, lo que provoca una situación preocupante de dejación y de inadecuación higiénica, sanitaria y alimentaria de las zonas veredales.

Si hay un claro hilo conductor entre las conclusiones de esta decimotercera edición y la anterior, es la constatación de esa gran preocupación que nos habían mostrado las organizaciones sociales y campesinas en la anterior visita de verificación: que a medida que se fuese produciendo una desmovilización de las FARC, ante la inacción del Estado, se produjese un nuevo despliegue del paramilitarismo en las zonas que antes estaban bajo

control guerrillero. Lamentablemente hemos sido testigos de que ese proceso de reparamilitarización es ya una realidad y que estos territorios hoy sufren las amenazas y la violencia de estos grupos que, lejos de estar desaparecidos como sostiene el gobierno colombiano, están activos, actuando con total impunidad. Volvemos de esta visita con la enorme preocupación de que el paramilitarismo -que sigue generando violencia, asesinatos y sufrimiento- no sea reconocido por el gobierno y por otras instituciones públicas, porque difícilmente se pone solución a un problema cuando no se reconoce, y el paramilitarismo es, sin ninguna duda, el mayor enemigo para la Paz en Colombia.

El informe que ahora tienes en tus manos es una herramienta para conocer la realidad, fruto del trabajo altruista de personas que dejan sus comodidades para, una vez al año hacer la mochila, meterse entre pecho y espalda miles de kilómetros por tierra, mar y aire, fundirse con las gentes de Colombia y dar así testimonio de la situación sin tapujos que viven sus habitantes.

Es un texto riguroso, con aportación de fechas y datos, con fuentes y recomendaciones, que pretende ser una ayuda para identificar y dar solución a los problemas estructurales de violencia y saqueo que son el origen de uno de los conflictos sociales más antiguos del mundo y que solo abordando con veracidad sus causas podrá conducir a la paz duradera con justicia, la única paz posible.

Como decíamos al inicio, nos sentimos orgullosos y agradecidos por haber podido participar de nuevo en este esfuerzo colectivo que tiene como objetivo que la verdad asome tras el velo del silencio que cimienta la impunidad.

**TANIA GONZÁLEZ PEÑAS**, Eurodiputada del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica. Integrante de PODEMOS/España. Vicepresidenta de la Delegación del Parlamento para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina. Miembro de la Comisión de Transportes y Turismo. Vicepresidenta del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica.

**JAVIER COUSO PERMUY**, Eurodiputado del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica. Integrante de Izquierda Unida/España; Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. Miembro de la Subcomisión de Seguridad y Defensa. Miembro de la Delegación para las Relaciones con la Asamblea Parlamentaria de la OTAN.

## **LA 13 DELEGACIÓN ASTURIANA DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA ESTUVO INTEGRADA POR:**

1. **Tania González Peñas**, Eurodiputada del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica. Integrante de PODEMOS/España. Vicepresidenta de la Delegación del Europarlamento para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina. Miembro de la Comisión de Transportes y Turismo. Vicepresidenta del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica.
2. **Javier Couso Permuy**, Eurodiputado del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica. Integrante de Izquierda Unida/España. Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. Miembro de la Subcomisión de Seguridad y Defensa. Miembro de la Delegación para las Relaciones con la Asamblea Parlamentaria de la OTAN
3. **Mario José Suárez del Fueyo**, concejal del Ayuntamiento de Gijón/Asturias. Secretario General de Podemos en Xixón.
4. **Celestina Intriago Fernández**, presidenta de la Coordinadora de ONGs. de Asturias.
5. **Carmen Alonso Villaseñor**, Vicepresidenta de Ingeniería Sin Fronteras Asturias
6. **Jesús de la Roza Braga**, Representante de la Confederación Intersindical, SUATEA.
7. **Ana María Andrés Ablanedo**, Coordinadora de la Asociación de Cooperación, Solidaridad y Derechos Humanos Soldepaz Pachakuti.
8. **Daniel Busto Gutiérrez**, delegado de la Corriente Sindical de Izquierda.
9. **Francisco Javier Arjona Muñoz**, Asociación de Cooperación, Solidaridad y Derechos Humanos Soldepaz Pachakuti
10. **Carlos María Meana Suárez**, Abogado laboralista
11. **Javier Orozco Peñaranda**, Coordinador del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia. Coordinador Técnico de la Delegación Asturiana.
12. **Jairo Vargas Martín**, Periodista del diario digital Público

# SITUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ CON LAS FARC Y DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA EN EL 2016

*“Sin embargo, gran parte del horror que los colombianos han sido forzados a soportar durante décadas no ha estado directamente vinculado al combate directo entre las fuerzas de seguridad y las FARC. Aquellos que trabajan sin ser vistos, defendiendo los derechos o protegiendo los recursos naturales y territorios de los poderosos intereses económicos, siguen enfrentando hostigamiento y ataques mortales, por lo que el acuerdo de paz en sí mismo puede hacer poco para mantener a estos activistas a salvo. Lo que necesitan es una acción eficaz para asegurar a aquellos que están detrás de esos ataques enfrenten una justicia adecuada”.*

## ESTADO DE LOS ACUERDOS DE LA HABANA Y DEL PROCESO DE PAZ CON LAS FARC

La Delegación Asturiana saluda los Acuerdos para el fin del conflicto armado interno suscritos a finales del 2016 entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP que impulsan la esperanza de alcanzar la paz y la justicia social tras medio siglo de confrontación. El cumplimiento del cese al fuego por las dos partes se refleja en la disminución del número de víctimas dentro del conflicto armado.

Sin embargo, hay sectores económicos y políticos que obstaculizan el cumplimiento de los Acuerdos en los que se contemplan programas para mejorar la democracia, el estado de derecho, la equidad, los Derechos Humanos.

Los resultados del plebiscito del 2 de octubre del 2016 implicaron una renegociación de los Acuerdos de La Habana, que pasaron al Congreso de la República para ser convertidos en leyes y actos legislativos, lo que implica una tercera negociación. El gobierno lleva un notable retraso en la construcción de las obras básicas para el asentamiento de las tropas insurgentes y está bajo la sospecha de actos de corrupción en la contratación de estas infraestructuras.

Hay incumplimientos del gobierno en la atención en salud a combatientes enfermos-as, lisiados-as, heridos, madres gestantes y recién nacidos. Hay retraso en la aplicación de las normas de amnistía e indulto, e incumplimiento del compromiso de concertación con las comunidades rurales previa a la erradicación de cultivos de uso ilícito.

La Justicia Especial para la Paz contenida en los Acuerdos de La Habana ha recibido apoyo internacional, pero ha sido cuestionada por sectores del poder y de las víctimas, al tiempo que militares que están siendo investigados por delitos graves como las ejecuciones extrajudiciales piden acogerse a ella.

La persistencia, extensión y accionar violento de los grupos paramilitares ponen de presente la falta de voluntad del gobierno para combatirlos y la ausencia de garantías para la vida de los excombatientes y de las poblaciones donde el Estado está permitiendo la sustitución del control territorial de las FARC por el de estos grupos ligados a las mafias de narcotraficantes, al poder latifundista y a proyectos de inversión.

“El asesinato de seis indígenas en la última semana genera serias dudas sobre la efectividad de las medidas implementadas por el gobierno para avanzar en el proceso de paz en Colombia.”

La 13 Delegación recibió informaciones que sitúan a los grupos paramilitares en el entorno de la ZVTN, de



El Pedregal, Caldonó/Cauca, donde avisaron de que ahora ellos sustituyen a la guerrilla en el control de la región. Ya impusieron un toque de queda que obligó a los indígenas a pedir ampliación de los horarios para realizar sus ritos. La fuerza pública niega la existencia de paramilitares en esa zona.”

Los Acuerdos de La Habana comienzan a tener tropezos en su etapa de implementación. Para solventarlos las partes encabezadas por el presidente de la república y el comandante de las FARC asistieron a la sesión de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación de los Acuerdos de La Habana. Acordaron en desarrollo priorizar las normas para la implementación del Acuerdo Final. Un paquete de leyes y reformas constitucionales que desarrollen el Punto 1, Desarrollo Rural Integral y la creación de la Comisión de la Verdad y de la Unidad de Búsqueda de Personas desaparecidas. En garantías de seguridad, agilizar mecanismos; entrega por las FARC de la lista completa de sus combatientes incluyendo la de las milicias, con el compromiso del gobierno de agilizar las amnistías. En abril el gobierno entregaría a las FARC todas las infraestructuras en las zonas veredales, dotadas de ambulancias y personal médico. Revisaron los programas de reincorporación y la oferta institucional de proyectos productivos. Acordaron acelerar la dejación de armas por las FARC y la capacitación para algunos excombatientes que ingresarán a la Unidad Nacional de Protección, otros participarán en labores de desminado humanitario y en sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito.

La 13 delegación expresa también su apoyo a la Mesa de Diálogo instalada en marzo del presente año con el ELN en Quito y saluda la voluntad expresa de las partes de hacer acciones humanitarias que bajen el nivel de la confrontación. Insta al gobierno a dialogar con el EPL, organización que ha expresado su voluntad de abrir una mesa de negociación.



## **La 13 Delegación Asturiana visitó dos Zonas Veredales Transitorias de Normalización y sostuvo entrevistas con mandos, combatientes, comunidades vecinas, quienes expresaron:**

### **La Elvira, Buenos Aires/Cauca.**

“Gracias por la visita. Sin el apoyo de la comunidad internacional no se cumplirán los Acuerdos firmados para terminar una guerra de 52 años con más de 250 mil muertos. Las FARC debíamos estar a 31 de enero de este año concentradas en las Zonas Veredales y cumplimos. Pero el gobierno no ha sido capaz de hacerlo. Miren como estamos entre el barro, con las obras en los campamentos a medias o sin comenzar, trabajan con máquinas de juguete, no hay luz, ni agua, ni zonas comunes, la única prisa que tiene el gobierno y la ONU es que dejemos las armas. Pero no hay garantías para la vida, y a la Justicia Especial para la Paz la están obstruyendo para enredar la Ley de Amnistía e Indulto.

“Toda mi juventud la absorbió esta guerra asimétrica, en la que ellos tienen 550 mil hombres y 5 millones de soplones, además de la tecnología y del apoyo de Estados Unidos, pero nosotros en las FARC no somos militares de academia, no recibimos ayuda exterior, nos formamos en el campo de batalla y les resistimos. A pesar de estar invisibilizados junto con nuestra verdad, hemos sido el Estado en muchas regiones por medio siglo”.

“Aquí en esta parte del Cauca no hay paramilitares porque los derrotamos militarmente, pero todos los territorios que controlaban las FARC están siendo copados por los paramilitares. Es plan del alto gobierno debilitar, aislar a las FARC. Europa que vendió armas y apoyó la guerra debiera apoyar la paz, sacar a las FARC de la lista Clinton”.

“En esta zona veredal estamos 292 guerrilleros-as, y los alimentos del gobierno llegaban podridos. Queremos abastecernos con las comunidades. No hay atención médica y tenemos lisiados y heridos sin atención sanitaria”.

“El gobierno reglamenta los Acuerdos para invisibilizar, bloquear, aislar, dividir a las FARC; el Congreso de la República se erige como juez de los Acuerdos poniéndose por encima de lo firmado; el Alto Consejero para la Paz no tiene mando en tropa, pero se impone generando problemas en el Ejército Nacional. Al interior del gobierno hay divisiones frente a los Acuerdos y no se lucha contra el paramilitarismo. No se elimina la doctrina del enemigo interno que empapa a la fuerza pública. Si la etapa de negociación fue difícil, esta de hacer cumplir los compromisos pinta peor”.

“Ustedes como comunidad internacional fueron retenidos por venir a visitarnos, imaginen el trato que les dan a las gentes de aquí, pero estas zonas son de libre tránsito y para que la población venga a dialogar. No estamos presos ni visitarnos requiere autorización. Si la policía lo requiere puede pedir identificación, pero nada

más. Eso es lo acordado. Con esto obstaculizan nuestro paso de ser guerrilleros a ser movimiento civil. Hay incumplimientos en todos los niveles de los Acuerdos, incluida la no erradicación forzosa de cultivos ilegales pues nuestras bases saben disparar y manejar explosivos, si los atacan habrá otro tipo de conflicto. Tenemos información de que en Tumaco se están montando 12 nuevos grupos armados. Tampoco han cumplido con las excarcelaciones de guerrilleros presos, ni con la aplicación de la Justicia Especial para la Paz. No puede el gobierno impedir el acceso de nuestros visitantes a las zonas como lo hizo el Alto Comisionado de Paz con la Delegación Asturiana violando los acuerdos. Quieren aislarnos, dividirnos, pero somos libres porque nos lo ganamos a plomo”.

“El MMV es tripartito, ambas partes cumplen e incumplen, pero hay diálogo, consensuamos, acordamos, actuamos, resolvemos asuntos como el transporte de enfermos, o de personas que van a capacitaciones. En el caso de la visita de la Delegación Asturiana reconocemos que hubo falta de coordinación en el MMV. Sí hay información de presencia de BACRIM cerca de algunas zonas veredales, pero no en el Cauca”.

### **La Fila, Icononzo/Tolima.**

En La Fila la guerrilla vive entre el barro y bajo tela asfáltica. El gobierno acumula retrasos en las obras contenidas en Los Acuerdos de La Habana.

“El gobierno incumple de manera sistemática el acuerdo, no sólo en infraestructura, en excarcelaciones y están poniendo dificultades para el ingreso de personas y organizaciones colombianas a esta zona veredal. Al grupo del Pacto Juvenil por la Paz que venía a dialogar la policía no los dejó entrar y tuvieron que devolverse al pueblo a dormir en la calle; les toman fotos a las personas, reseñan a



los carros y a los visitantes, retuvieron a unos ecologistas irlandeses. Son actos sistemáticos para aislarnos. Comenzó la corrupción con los recursos de la paz, aquí trajeron unas casas prefabricadas que no es lo acordado y no las dejamos poner. No luchamos 52 años para que nos metan en cajas de cartón como a ratones. Pero lo más urgente es liberar a los presos. Pedimos trato digno y cumplimiento de lo acordado. El 90% del Acuerdo no es para las FARC, son derechos para la población, y cumplir el acuerdo es también perseguir a los paramilitares para que haya garantías. En las FARC



no tenemos plan B, no daremos pasos atrás en la construcción de paz. La paz no es sólo para las FARC. El Plan B es la movilización social y popular”.

“Aquí somos 340 combatientes, hay ocho mujeres embarazadas, una con pre-eclampsia, y tenemos siete niños, 38 enfermos, varios discapacitados. El gobierno mandó a una comisión del ICBF que sólo vacunó a los niños, pero no se les dio atención médica, no fue una “atención integral” como afirmaron. Aquí hay tropas que viajaron desde la selva del Yarí cumpliendo lo acordado hasta San Vicente y les metieron 32 horas en bus sin comida ni alojamiento. Y llegan a estas condiciones... y con un clima frío y lluvioso. La dejación de armas se hará si el gobierno cumple los acuerdos”.

La comunidad campesina de La Fila acogió a las tropas de las FARC establecidas dentro de una ZNV. “Somos de aquí de la región. Nosotros aportamos al proceso de paz este territorio campesino para que las FARC puedan pasar a la vida civil y, de paso, que el gobierno reconozca que en esta región no hay inversión social del Estado, faltan escuelas, colegios, tenemos 300 niños, no hay agua potable. Este es un territorio de resistencia desde la época de Juan de la Cruz Varela, Erasmo Valencia, grupos de campesinos obligados a tomar las armas en 1948 y que ahora regresan siendo un ejército que hace pedagogía de los de los Acuerdos y de la paz”.

“Nosotros dejamos las armas, pero que salgan los presos, que se combata al paramilitarismo, que haya



garantías, que cumplan los acuerdos. El acompañamiento internacional es importante para el gobierno y para las FARC. Yo soy guerrillera y él es coronel, aprendimos a respetarnos, a tolerarnos, a trabajar juntos. Éramos enemigos, si pudimos dejar de serlo, otros podrán. Hay que combatir a quienes generan odio”.

“Si no funcionan los acuerdos, se paralizará la dejación de armas”.

“Hay una estrategia de dilación y de renegociación para eliminar del Acuerdo lo pactado en cuatro años de diálogos. El

Acuerdo quedó en manos del Congreso, no quedó como parte del bloque de constitucionalidad y eso genera otras dificultades. Hay voluntad de cumplir, por ejemplo, con la amnistía, pero los jueces de ejecución de penas no dejan avanzar en las liberaciones. Simón Trinidad debiera ser liberado por los Estados Unidos, su organización firmó la paz. En marzo habrá cambios en la mesa directiva del Congreso de cara a la campaña electoral y puede perderse la mayoría parlamentaria necesaria para sacar las leyes y actos legislativos para la implementación de los acuerdos, antes de que acabe el plazo. No cumplen lo acordado en atención en salud y nosotros ya eliminamos nuestro sistema de salud. En Mesetas tenemos mil guerrilleros, sólo hay un médico, una enfermera y una ambulancia. La guerrilla vivía mejor en los campamentos de la selva que en las zonas veredales. Fruto del amor y de la paz los campamentos se van llenando de “los hijos de la paz”, el gobierno no suministra atención médica. Negaron la atención psicológica a guerrilleros “porque eso sería darle a la guerrilla un servicio que la población no tiene, genera inequidad” Quieren bloquear el nacimiento político de las FARC. Es un peligro para la paz y para la vida la falta de voluntad de disolver, eliminar, controlar, al paramilitarismo. Dentro del Estado hay sectores de oficiales y funcionarios que sí están por combatirlos, pero otros sectores no acatan la voluntad del presidente. Eliminarlos será fácil, nos custodia la policía y los paramilitares son de la policía y del ejército. En las zonas veredales estamos haciendo el tránsito de guerrilla a partido El mayor peligro -y algunos moriremos- será cuando avance la campaña electoral. Ya renunciamos a un despliegue estratégico de 52 años, que es la mayor concesión militar. Pero hay serios peligros: la columna Daniel Aldana denuncia que hay paramilitares junto al ejército. Hemos exigido garantías. Un sector del Estado no cambia su estrategia criminal y están siendo asesinados los líderes sociales, es un plan hacia el proceso electoral, hay un diseñador del exterminio”.

# SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DURANTE EL 2016

Colombia está lejos de vivir en paz. En el año 2016 disminuyeron los casos de violencia asociada al conflicto armado interno, pero se incrementaron los ataques selectivos, sistemáticos, contra los dirigentes sociales y personas que defienden los Derechos Humanos, de manera grave contra movimientos sociales y políticos como Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos, dirigentes campesinos-as e indígenas y afros, personas de las organizaciones de LGBTI, sindicalistas.

Las agresiones, según las denuncias recibidas, provienen en su mayoría de los grupos paramilitares y de la fuerza pública en territorios sometidos a re-paramilitarización, incluidas las zonas abandonadas por las FARC.

El gobierno colombiano, a través del Ministro de Defensa, negó la existencia de los grupos paramilitares y el carácter sistemático de los ataques contra la dirigencia social. Las organizaciones sociales hablan de un nuevo plan de exterminio político contra la dirigencia social del país. Para la OACNUH estos crímenes están vinculados con intereses criminales colectivos o individuales. Para las FARC es una estrategia de persecución hacia la campaña electoral, para generar miedo alrededor del surgimiento de su nuevo movimiento político. Para Amnistía Internacional “Muchos de estos ataques están vinculados con grupos armados que buscan tomar el control de tierras ricas en recursos pertenecientes a las comunidades rurales para explotarlas con fines económicos”.

Para el Ministerio de Defensa “El crimen organizado busca copar las economías ilegales. Hay liderazgos sociales que son un obstáculo, de ahí los crímenes: por la explotación de recursos mineros ilegales; a campesinos que quieren cambiar los cultivos ilícitos; a líderes reclamantes de tierras. No es una estructura uniforme de una organización criminal que elimine liderazgos por su trabajo en derechos humanos, sino grupos que se encuentran con obstáculos en su interés por ocupar economías ilícitas. Son pocos los casos de homicidios por el liderazgo social comunitario. Están más asociados al control del territorio.”

Se mantienen las altas tasas de impunidad para las agresiones contra la dirigencia social y las personas que defienden los Derechos Humanos. “Los delitos de quienes llevaron a cabo estos abusos, los ordenaron o se beneficiaron de ellos, aun cuando se trate de personas dedicadas al mundo de los negocios o a la política, no pueden ni deben descartarse de un plumazo”.

Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales de América y tiene una de las mayores tasas de crecimiento y de corrupción. La pobreza es mayor en las zonas rurales y afecta más a los pueblos indígenas, al



campesinado, y las comunidades negras.

La falta de derechos está en el centro de las protestas sociales contra las que se utilizó tropa del ejército y de la policía haciendo uso abusivo de la fuerza. El gobierno no cumple los acuerdos que firma con las comunidades movilizadas haciendo inútil el diálogo social, generando mayor inconformidad y desconfianza.

Las libertades básicas incluidas la de expresión, movilización, organización, intimidad, han quedado amenazadas por el nuevo Código de Policía que permite a una institución muy desprestigiada hacer allanamientos y detenciones sin orden judicial.

La prensa independiente es perseguida. La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, reportó 91 amenazas contra periodistas entre enero y octubre de 2016.

## **1-. ATAQUES A SINDICALISTAS Y DEFENSORES-AS DE LOS DERECHOS HUMANOS.**

1. Durante el año 2016 se incrementaron los ataques contra la dirigencia social colombiana, lo que afecta a la población en general. Se registraron 389 ataques contra líderes sociales, 60 fueron asesinados, tres desaparecidos y centenares recibieron amenazas de muerte, individuales y colectivas. Entre las 5 víctimas asesinadas hay 4 mujeres, 6 líderes indígenas, 3 líderes LGBTI, 3 sindicalistas, un líder afrocolombiano y 2 líderes juveniles, según la ONU.

2. “En el 2016 hubo una disminución de los homicidios en general y un incremento de los homicidios de defensores-as de los Derechos Humanos. Tenemos fallas estructurales en las investigaciones que esperamos resolver pronto. Buscamos una estrategia de investigación/sanción para estos casos. La primera hipótesis para la investigación debe ser retaliación por defender los derechos Humanos”.

3. La mayoría de los ataques a la dirigencia social se dieron en zonas rurales que estaban bajo el control de las FARC en los departamentos del Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Meta, Córdoba, y las víctimas no tenían medidas de protección.

4. Persiste la cultura de estigmatizar a la dirigencia social, a los sindicalistas, a quienes defienden los Dere-

chos Humanos; no hay garantías para la vida, no hay protección efectiva para los líderes sociales y se mantiene la exclusión. Están siendo asesinados los interlocutores sociales legítimos del Estado, representantes de procesos sociales llamados a participar en la reconciliación y la reconstrucción nacional. “Es esencial y de la mayor importancia el rol que defensores y defensoras tienen en la transición hacia la paz en Colombia, por ello, es vital que el Estado refuerce sistemas dirigidos a la prevención y protección de este colectivo”.

5. Los paramilitares lanzan amenazas de muerte colectivas con impunidad y los medios masivos las reproducen. “Le informamos a la comunidad en general del departamento del Tolima que hoy más que nunca hacemos presencia en este territorio liberándolo de guerrilleros y comunistas por eso ofrecemos 5.000.000 de pesos por la cabeza de los (...) guerrilleros, terroristas y comunistas que le han hecho tanto daño al Tolima y a nuestro país con el cuento de la paz.... declaramos objetivo militar a los guerrilleros que se hacen pasar por indígenas”.

6. Entre los amenazados se encuentran directivos de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima, ASTRACATOL; el presidente y el vicepresidente de la Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima, ACIT, Luma Flores y Ángel Ortiz; el vicepresidente de FENSUAGRO, Guillermo Cano; los promotores de las Zonas de Reserva Campesina; uno de los voceros departamentales de la Marcha Patriótica, Juan Gabriel Bermúdez y otros activistas.

7. La Ley de inteligencia expedida en el 2013 es motivo de preocupación por los antecedentes de penetración del narcotráfico y del paramilitarismo en el DAS, y del acopio y utilización criminal por agentes del Estado de información personal de dirigentes sociales y políticos, dentro de Colombia y en la Unión Europea, por lo que las organizaciones de Derechos Humanos insisten en la depuración de los archivos de seguridad nacional, incluidos los archivos de inteligencia con información sobre defensores-as de derechos humanos, dirigentes de la oposición y miembros del partido que funden las FARC.

8. Hubo un incremento de los conflictos ambientales, laborales, por tierras. El gobierno viene utilizando al ejército dotado con material de guerra para enfrentar la protesta social, lo que constituye un uso desproporcionado de la fuerza, así como su empleo en labores de seguridad ciudadana, resultando en varias personas asesinadas y decenas de heridas durante el 2016.



9. “El departamento de Córdoba tiene 20 mil profesores. Y 120 han sido asesinados. Es el departamento más peligroso para los maestros que en muchos sitios es el

único representante civil del Estado. Desmovilizados los paramilitares entre el 2002 y el 2010 hay otra vez extorsiones, desplazamientos forzados en todo el departamento y amenazas de muerte en Lorica, Montería y Sahagún. Muchos educadores amenazados no denuncian porque no hay garantías ante las represalias. Los ataques a los maestros afectan a los alumnos y a toda la comunidad”.



10. El 7 de marzo/16 asesinaron en El Bagre/Antioquia a William Castillo Chima, defensor de derechos Humanos y líder de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó, Aheramigua. Estaba amenazado desde febrero del 2014 por defender el derecho de las comunidades a quedarse en sus tierras a pesar del acoso de las empresas mineras. Su situación de riesgo era conocida por las autoridades.

11. El 17 de noviembre en la ciudad de Sincelejo-Sucre, atentaron contra la vida de ARGEMIRO LARA BARRETO, líder de restitución de las tierras de la Finca La Europa en la ciudad de Sincelejo-Sucre. Argemiro fue atacado por dos sicarios en moto uno de los cuales quedó muerto por la reacción de la escolta asignada al líder campesino quien viene exigiendo la devolución a su comunidad de las tierras usurpadas por la violencia paramilitar al servicio de la empresa Arepas Don Juan, cuyo capataz disparó e hirió de cuatro balazos a ANDRES MANUEL NARVAEZ REYES, dirigente de la misma finca y quien estuvo refugiado en Gijón acogido por el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia.

12. “Los gobiernos llevan décadas intentando privatizar la empresa pública ECOPETROL y la USO ha defendido el patrimonio nacional poniendo muertos, detenidos, desaparecidos, desplazados, despedidos, amenazados. En el proyecto REFICAR se robaron 4 mil millones de dólares, cada privatización lleva corrupción, persecuciones, como ISAGEN, PROFILCO, ETB... En la refinería de Mamonal esta mañana se completaban 24 horas de protesta de los obreros por la reducción del 50% del salario de los trabajadores no misionales y contra la tercerización laboral. Llegaron el ESMAD, la policía y el ejército, arremetieron contra los trabajadores, con rifles, gaseando en medio de zonas donde pueden generar una gran explosión. Van siete heridos que no dejan



sacar de la refinería y cinco detenidos. Ayer recibimos nuevas amenazas del grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas contra la USO, por oponernos al fracking en el Cesar y otras zonas. Cartagena tiene más del 58% de su población en situación de pobreza y está tomada por los paramilitares que matan a personas en los barrios y las autoridades lo saben: en Nelson Mandela, Pasacaballos, El Pozón, La Popa... Se repite la historia de 1998 al 2001 con el asesinato de AURY SARÁ MARRUGO. La USO apoya los acuerdos con las FARC y los diálogos con el ELN, y agradece a la solidaridad asturiana esta visita, y la defensa de los Derechos Humanos al acoger a sindicalistas perseguidos, como fue mi caso”.

13. “Los paramilitares Autodefensas Gaitanistas, o Clan del Golfo, amenazaron de muerte el 25 de noviembre/16 a varios profesores en Pueblo Nuevo/Tierralta. En la vereda Gallo hay un sitio de concentración del Frente 58 de las FARC y hay una escuela y paramilitares que amenazan a los que hablan de paz. El 19 de enero de este año -2017- fue asesinado el presidente de los campesinos del Comité Cocalero, HER-

NAN AGAMEZ-. No hay garantías para enseñar, ni para opinar, ni para vivir”.

14. “A la Marcha Patriótica la están exterminando, ya van 130 de sus integrantes asesinados. En Córdoba tenemos 28 desplazados y 12 asesinados, los dos últimos este año 2017, a uno lo asesinaron los paras por promover la erradicación de coca, ellos pagan por sembrarla”.

15. “Las violaciones de los Derechos Humanos continúan y ya no están las FARC para que les echen la culpa. Hay mucha amenaza, mucho asesinato y mucho silencio porque la gente tiene miedo de denunciar. Por eso en el departamento del Putumayo hay una mejoría que es sólo aparente, hay un subregistro de asesinatos, amenazas y desplazamientos en Puerto Caicedo, Orito, La Hormiga, Puerto Asís, San Miguel”.

16. En el departamento del Cauca hay ataques graves y sistemáticos contra la dirigencia social y contra el movimiento que defiende los Derechos Humanos.

17. “Aquí hay un plan de exterminio contra la dirigencia social. Más de 400 personas fueron asesinadas en el 2016 y de ellas 40 es decir el 10% era dirigentes. Centenares más recibieron amenazas de muerte de los paramilitares, pero la fiscalía no investiga su autoría pues no las reconoce como hecho cierto. Varios dirigentes fueron detenidos mediante montajes judiciales”.

18. “A ASOINCA la persiguen para acabarla. Estamos afectados con tantas amenazas y con la impunidad”.

19. “Hace tres días asesinaron en Mercaderes al dirigente campesino y popular FAIVER CERON, opositor de la minería”.

20. “No aguantamos más amenazas de muerte individuales y colectivas, asesinatos, ataques. No hay garantías por parte del Estado al que no le vemos voluntad de combatir al paramilitarismo. Niegan su existencia, no los ataca la fuerza pública”.

21. “El 31 de diciembre los paramilitares asesinaron a cuatro personas en Balboa-Cauca. La policía recibió información de quién lo hizo, pero no detuvo a los sicarios que usan la misma moto desde la que mataron a un líder afro el 25 de diciembre en Argelia, y el sábado pasado asesinaron a otras tres personas en el mismo pueblo generando pánico pues eso no pasaba desde hace diez años”.

22. “Soy funcionaria y dirigente del Sindicato Unitario de Trabajadores del Estado. Me dejaron una amenaza de muerte en el escritorio, pero las autoridades no le dan importancia, no investigan”.

23. “Los ataques y amenazas de los paramilitares ocurren también en el Macizo Colombiano. En Bolívar/Cauca amenazaron a miembros de la COCAM y obligan al desplazamiento. A EDWIN JAIR SOLIS del municipio de Sucre/Cauca lo atacaron y se salvó de un atentado esta semana; LEIDER VALENCIA líder de la Asociación Campesina de Miranda ha sobrevivido a tres atentados. Dizque hay paz, pero no hay garantías”.



24. “En Norosí hubo 16 asesinados en el año 2016, eso no se veía desde los peores días bajo el control del Bloque Central Bolívar de los paramilitares. Las llamadas autodefensas Gaitanistas asesinaron a una persona el 29 de enero/16; el 29 de marzo asesinaron a ESTEBAN GUTIERREZ, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal por oponerse a la apertura de un prostíbulo frente a un preescolar. Los mismos paras asesinaron a JOACO en la vereda La Cooperativa de Río Viejo a 2 kilómetros de Mina Estrella; el 16 de junio asesinaron a una trabajadora sexual en El Polvillo-Buenavista/Norosí; el 28 de agosto asesinaron en Mina Estrella a WALTER JULIO DIAZ PAYARES, el 19 de noviembre mataron a EDUARDO GARCIA estando en la zona el CICR; desde el 16 de diciembre hay amenazas y desplazamientos porque la gente se niega a ser paramilitar. El 3 de febrero/17 amenazaron de muerte a ELIZABETH GUERRA cerca de un control militar. El ejército y la policía son socios de los paras. Si tantos crímenes los hubiera cometido la guerrilla ya habrían bombardeado”.

25. “Familias víctimas de desplazamiento ocuparon por más de dos años las fincas Mariapola y San Isidro, del narcotraficante preso en Estados Unidos VICTOR MANUEL MEJIA MUNERA que usa testaferreros y consiguió comprar a la inspectora de policía para autorizar un desalojo violento el 17 de febrero del 2017 en el que intervino el ESMAD y encapuchados armados”.



26. “Los trabajadores afiliados a SINTRAINAGRO han sufrido la persecución sindical, las amenazas, el exilio y la muerte. Se ha denunciado la precariedad del empleo en las plantaciones de palma. SINTRAPROACEITES sufrió en seis años -1919-1985- diez asesinatos”.

27. “No es coincidencia que donde está Anglo Gold Ashanti haya violencia. Mataron a PEDRO CESAR, quince días antes atentaron contra una comisión del IGAC hiriendo y matando al conductor del autobús, una semana más tarde mataron a un joven del comité ambiental COSAJUCA, tres muertos en la misma zona, todos vinculados a la resistencia contra AGA. Un año más tarde aparece colgado de un árbol un ambientalista, era otro resistente. En todos estos crímenes hay dudas, muchas preguntas, y el Estado quiere olvido”.

28. “El Comité Cuiba denuncia que los terratenientes se apropiaron de los playones de las ciénagas estirando los linderos y desecando, ya no hay pescado ni tierra. Los paramilitares nos han amenazado a todos los de la ciénaga de Madre Vieja, nos exigen irse o morir. Estamos solos y abandonados”.

29. “Reconocer tu orientación sexual es exponerte a la muerte, al marginamiento, a las burlas y al escarnio. En Sucre ya van 16 personas asesinadas selectivamente por ser transgénero, todos esos crímenes quedan impunes, como la persecución a los líderes campesinos. Me matriculé en la universidad y mis compañeros no inscribieron materias hasta saber en qué salón me tocaba, para no coincidir. Temen que me hagan un atentado. Temo por mi vida en todo momento”.

30. “Las comunidades de las Zonas Humanitarias del Cacarica denunciarnos que los paramilitares entraron armados a la zona humanitaria Nueva Esperanza en Dios, tumbaron varias casas y maltrataron a la gente, buscan a personas. Luego se fueron a la comunidad de Bijao donde están hace un mes. La comunidad teme por sus integrantes y por sus líderes, hay amenazas de muerte. Los paramilitares son aliados de la fuerza pública, y avanzan ocupando los territorios que dejaron las FARC. Estamos en manos de la fuerza pública a la que no le tenemos confianza porque en el desplazamiento del 97 ayudó a los paracos a sacarnos. Los paramilitares ame-

nazaron a los líderes de CAVIDA, llevan brazalete que dice Autodefensas Gaitanistas del Darién”.

31. Los dirigentes de los pueblos indígenas y de las comunidades negras están siendo asesinados. “El 11 de septiembre fue asesinado en Chiriguaná/Cesar NESTOR MARTINEZ, líder negro del Consejo Comunitario de La Sierra, El Cruce y La Estación, integrante además del movimiento social Congreso de los Pueblos, defensor del medio ambiente y de la economía campesina. El 29 de agosto asesinaron en Almaguer/Cauca, tres dirigentes del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA): JOEL MENESES, NERERO MENESES y ARIEL SOTO. A finales de agosto asesinaron a CAMILO TAICÚS BISBICÚS, líder del pueblo awá de Hojal La Turbia/Tumaco. En esos días asesinaron a tres indígenas más en Llorente y Barbacoas”.

32. “Las Autoridades Tradicionales de los Pueblos Indígenas del Municipio de San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá, denunciarnos que el día de ayer en la noche al salir del velorio del compañero dirigente ERLEY MONROY fue baleado por pistoleros el compañero HUGO CUELLAR, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Victoria, quien se encuentra en gravísimo estado de salud.... El día 18 de noviembre fue asesinado por un hombre encapuchado en su propia casa en la vereda Platanillo el dirigente DIDIER LOSADA BARRETO. El día 18 de noviembre de los corrientes fue asesinado el dirigente ERLEY MONROY miembro de la Asociación Campesina ASCAL-G, quien fue encontrado en cercanías al Batallón Cazadores”.

33. “En San Vicente del Caguán el alcalde del partido CENTRO DEMOCRATICO, el señor HUMBERTO SANCHEZ CEDENO, hizo señalamientos fuertes mediante un montaje fotográfico acusando a un amplio grupo de dirigentes sociales de ser miembros de la guerrilla y lo enviaba vía electrónica al señor ALVARO URIBE VELEZ. Desde que es alcalde aparecen grafitis con letreros alusivos a las AUC en viviendas del casco urbano ubicadas a las salidas de Florencia y Neiva. El alcalde arremete contra las organizaciones sociales indígenas y campesinas tanto en medios televisivos, radiales como electrónicos en contra de la Asociación Campesina del Losada Guayabero ASCAL-G. Los concejales del Polo Democrático Alternativo fueron amenazados por panfletos suscritos por grupos paramilitares y se les ordenaba salir del municipio por apoyar el SI en el plebiscito. El alcalde destituyó a los



funcionarios de la alcaldía que apoyaron el SI A LA PAZ en el plebiscito. Todo lo anterior sumado a una serie de asesinatos que se han presentado en los últimos meses y que arrojan como resultado el asesinato de tres di-



DDHH y líder de Víctimas.

rigentes sociales en menos de 48 horas”.

34. La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes” y la Comisión de Derechos Humanos del movimiento político y social Marcha Patriótica denunciaron que “Continúan los señalamientos y amenazas de muerte del grupo Paramilitar Autodenominado “AUC” en contra de líderes y Defensores-as de Derechos Humanos de la Coordinación Campesina y el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en el Departamento del Cauca, amenazaron al dirigente campesino y de la Marcha Patriótica HUBER BALLETEROS GOMEZ quien recobró su libertad luego de 3,5 años preso por un montaje judicial, y ha sido amenazado de muerte. Y el martes 3 de enero de 2017 los paramilitares amenazaron de muerte al Defensor de Derechos Humanos, dirigente agrario, sindical y de Marcha Patriótica en el Cauca, OSCAR GERARDO SALAZAR MUÑOZ”.

35. El 19 de abril/17 fue asesinado GERSON ACOSTA, dirigente del Cabildo indígena Kite Kiwe de Timbío/Cauca al salir de reunión de su comunidad. Tenía medidas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección por amenazas como defensor de

36. Es grave la persecución contra la dirigencia indígena del pueblo embera, resguardo de Cañamomo Lomaprieta/Caldas. El 7 de abril/15 fue asesinado el líder FERNANDO SALAZAR CALVO. El 17 de diciembre/16 es amenazado de muerte el exgobernador del resguardo HECTOR JAIME VINASCO.

## 2-. EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES. DIH

37. Durante el 2016 y después de entrar en vigor las medidas para erradicarla, se registraron seis ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la fuerza pública en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar, Nariño y Norte de Santander. La mitad de las personas ejecutadas lo fueron por la policía durante protestas sociales”.

38. Ni el ejército ni la policía asumen responsabilidad institucional por la práctica sistemática de las ejecu-

ciones extrajudiciales o los falsos positivos. “Lamentablemente, la reacción habitual del Ejército es corporativa. Los miembros del Ejército normalmente se defienden los unos a los otros y nos acusan de tener segundas intenciones o estar promoviendo una agenda proguerrilla, lo cual es un disparate que nadie cree. Lo mismo les ocurre a todas las organizaciones que hacen denuncias contra el Ejército. Esa actitud es lamentable porque si los miembros del Ejército realmente creen que los falsos positivos fueron crímenes aislados cometidos por supuestas “manzanas podridas”, entonces deberían apartarse de esas personas, en lugar de intentar protegerlas mediante intentos frustrados de expandir el fuero militar o de una reinvención del principio de “responsabilidad del mando”, lo cual intentan en la actualidad”.

39. La Misión Médica está siendo atacada en el Cauca. “Asesinaron a la enfermera ERICA junto con su esposo. Los ataques a médicos y enfermeras son sistemáticos. ¿Cómo es que estando sólo el ejército en una región se incrementa la violencia?”

### 3-. PARAMILITARISMO

40. El uso de la estrategia paramilitar es una práctica usada por la fuerza pública, sectores políticos y del empresariado desde hace al menos 69 años. “Entre 2003 y 2006, organizaciones paramilitares de derecha que tenían estrechos vínculos con la fuerza pública y con políticos participaron en un proceso oficial de desmovilización que presentó graves falencias, y tras el cual numerosos miembros permanecieron activos y se reorganizaron conformando nuevos grupos. Estos grupos sucesores siguen cometiendo abusos generalizados como asesinatos, desapariciones y violencia sexual. En ocasiones, se han beneficiado de la tolerancia e incluso la connivencia de agentes estatales”.



41. A Finales del 2015 había 63 congresistas condenados por nexos con el paramilitarismo.

42. La XIII Delegación Asturiana recibió informes y datos de las comunidades y de las organizaciones locales que prueban la presencia y el control paramilitar que cuentan con la tolerancia y hasta la complicidad de la fuerza pública en todas las regiones visitadas, Cauca, Centro y Sur de los departamentos de Bolívar y Cesar, Sucre, Córdoba y Bolívar.

43. Sin embargo, “Las autoridades colombianas de-

fienden categóricamente que todos los paramilitares han sido desmovilizados, pero la realidad es otra. En lugar de negar que los paramilitares continúan activos, las autoridades deben actuar para proteger a esas comunidades de los grupos que las aterrorizan”.

44. “El paramilitarismo se reinsertó y las disidencias son menos del 20%. La mayoría de estos ex-paramilitares están llevando una vida civil legítima y cuando reinciden se encuentran con la reacción de la fuerza pública. Los paramilitares son cosa del pasado porque estos grupos de hoy no tienen concepción contrainsurgente, son sólo estructuras de lucro a través de economías ilegales y no tienen vínculos con las fuerzas de seguridad y hay una lucha frontal contra ellos.”



45. “Hay BACRIM que se disputan los territorios dejados por las FARC y por sus disidencias, con el objetivo de controlar la minería ilícita y los cultivos de coca”.

46. “Paramilitares sí hay. Yo fui paramilitar y estuve en Antioquia donde se peleaba por tierra para sembrar coca. No peleábamos por ideas sino por el negocio, y políticamente apoyábamos a la extrema derecha, al patrón MARIO URIBE y a OTTO BULA que iban de la mano. El Ministro de Defensa niega el paramilitarismo porque su política es paramilitar”.

47. “El gobierno afirma que no hay paramilitares simplemente porque les cambia el nombre, pero están por todo el país. Los ha llamado de varias maneras según su conveniencia: autodefensas, paramilitares, bandas criminales emergentes -BACRIM-, y ahora Grupos Armados Organizados -GAO-. Hay paramilitares en todo el norte del Cauca y en la zona del Patía. En Balboa, Corinto y Miranda andan sueltos amenazando, en varias regiones las Águilas Negras le pusieron precio a la cabeza de los líderes sociales. Los paras están reclutando jóvenes desempleados y pagan bonificación por los dirigentes sociales que maten. En Caldonio se reforzó la alianza entre militares y paramilitares causando miedo y aunque el gobierno habla de posconflicto se ha incrementado la violencia y el peligro. Al salir las FARC llegan en su reemplazo los paramilitares, como en el sur del Cauca. Parece que la paz es sólo para las multinacionales.”

48. La Misión MAPP/OEA “Ni afirma ni niega la existencia de paramilitares. Nosotros no investigamos, sólo reflejamos en nuestros informes lo que las organizaciones sociales denuncian”.

49. Las informaciones que recibió nuestra Delegación dan cuenta de que los grupos paramilitares ya coparon los territorios dejados por las FARC en Balboa (Cauca) y en Ituango (Antioquia), departamentos en los que las llamadas Águilas Negras adelantan campañas de reclutamiento de menores; hay paramilitares en Puente Cauca que atracan y amenazan a menos de 200 metros de un puesto del ejército; las llamadas Autodefensas Gaitanistas están desplazando con violencia al pueblo indígena Wounan de Santa Rosa Guayacán-río San Juan; los paramilitares llamados La Constructora son tolerados por el Ejército en San Miguel (Putumayo); hay paramilitares encapuchados y armados, imponiendo toque de queda a campesinos e indígenas en la vereda El Pedregal (Caloto-Cauca), cerca de una Zona Veredal de las FARC y el Ejército no actúa; hay paramilitares en el Sur de Bolívar, en Buena Vista por ejemplo están haciendo reclutamiento forzado, extorsionan, amenazan; también recibimos informaciones de presencia paramilitar en el Centro y Sur del Cesar donde habrían penetrado a las instituciones, y en los conflictos por tierras y en algunas plantaciones de palma aceitera, así como en



los sitios de los proyectados puertos multimodales sobre el río Magdalena y en el entorno de las mineras del carbón. Hay denuncias de la presencia paramilitar en el departamento de Córdoba donde extorsionan a maestros de escuela y amenazan a la dirigencia social. Hay paramilitares alrededor de Punto de Concentración de las FARC en Gallo (Tierralta-Córdoba). Las organizaciones sociales denuncian que donde quiera que hay empresas multinacionales operan los grupos paramilitares como elemento de protección; en la vereda Sispatoca, municipio de San Benito Abad (Sucre), los paramilitares con la complicidad del Ejército amenazan a los pescadores y a los campesinos para despojarlos de las tierras desecadas, con la pasividad de la Fiscalía del departamento de

Sucre. Es la misma situación que se repite en las ciénagas de los ríos San Jorge, Sinú y Magdalena, donde el paramilitarismo actúa como brazo de terror de los ganaderos y narcotraficantes para acaparar terrenos de la nación que no defiende su propiedad sino ante los campesinos, como ocurre en las tierras de Madre Vieja y en el Cedral, San Benito Abad. Los paramilitares operan con libertad en la zona de La Mojana-Sucre, en Guaranda, en todo el río San Jorge convertidas en centros de reclutamiento de menores, de abastecimiento y en ruta de narcotraficantes; en los alrededores de la finca La Alemania (Sucre) reclamada en restitución por los campesinos, hay presencia paramilitar. También recibimos denuncias de redes urbanas paramilitares en barrios de



Cartagena, Barranquilla y Santa Martha, y es muy grave el cerco paramilitar permitido por el gobierno y la fuerza pública a las zonas humanitarias de San José de Apartadó, y en el Cacarica, lugar en el que el pasado 16 de febrero incursionaron con extrema violencia en los asentamientos Nueva Esperanza en Dios, a pesar de que el ejército está encargado de la protección perimetral.

50. El gobierno considera que ha tomado las medidas necesarias para asegurar la presencia del estado en los territorios que dejaron las FARC. “Se analizaron hasta 87 variables, perspectivas de desarrollo, etc., dando

prioridad a las áreas de mayor inestabilidad como el Catatumbo, Bajo Cauca, N.E. de Antioquia, El Pacífico (Nariño y Tumaco), el Cauca, donde la fuerza pública contempla una amplia presencia para que otros grupos no lleguen, al salir las FARC, a ocuparse de ilícitos: narcotráfico y minería ilegal.”

51. “La ASOCIPAZ es una asociación de paramilitares compuesta por alcaldes, concejales, comerciantes y terratenientes que nos bloquean la entrada a la región en los dos grandes ríos. Eso también le sirve a las multinacionales que se han repartido vía concesiones todo nuestro territorio, como la Corona Golfields y AGA. Hay minería ilegal de oro y contaminan las aguas en San Pancracio, Norosí, Tiquicio, Mina Estrella, Minazul, en San Martín de Loba hacen minería a cielo abierto, muchas de esas minas tienen campamento paramilitar a su servicio. El gobierno no interviene, pero sí nos persigue, por eso no creemos en el gobierno, sino en la autogestión, en nosotros mismos”.

52. “El grupo paramilitar “La Constructora” sigue existiendo, no es cierto que el ejército los acabó, sino que los esconden, los ocultan en los batallones. En Puerto Asís-Putumayo personas armadas cerca de una Zona Veredal de Normalización asesinaron a una persona e hirieron a dos. Para la fuerza pública son hechos aislados. En el Putumayo los paramilitares protegen intereses de las empresas mineras y tienen trabajo porque el 70% del territorio fue concesionado a las multinacionales”.

53. “Hay paramilitares con uniforme y arma larga entre Tiquicio y Montecristo. La fuerza pública lo sabe y no hace nada. En Barranco de Loba los paras están en la mina Santa Cruz. Tienen un corredor de narcotráfico, minería, asesinan, hacen reclutamiento forzado y retenes ilegales, además extorsionan, cobran \$3 mil



pesos por una canasta de cerveza, cobran por cada vaca, por cada gramo de oro. En Minabrisa/Norosí, dicen que ahora mandan ellos porque las FARC entregaron las armas. El gobierno no los combate, antes y sin vergüenza ¡nos convocó el 5 de diciembre pasado a un Consejo de Seguridad en un campamento paramilitar ¡”

54. “Los paras son protegidos por la fuerza pública que los conoce y no los detiene. Hay unos 70 paramilitares que tienen más de 30 hectáreas de coca y el gobierno sólo fumi-ga los cultivos de los campesinos, no los de jefes paramili-tares como alias Cagajunta, alias Aldemar, alias comandan-te Morales cuyo nombre es VICTOR CUESTA DIAZ por Mina Estrella. La mafia es la que gobierna este país.”

55. “Los paramilitares son el Ejército Anti-restitución de Tierras y operan hace años en Astrea/Cesar con impu-nidad”.

56. “En Puerto Oculto - San Alberto, el terrateniente y paramilitar ALIRIO DIAZ usa a los paramilitares simulando que son trabajadores para hostigar y desplazar a 27 familias campesinas y de pescadores que ocupan tierras baldías; les cortan las cercas, les tumban los ranchos y ellas lo han denunciado, pero el Inspector de Policía sólo atiende al Sr. DÍAZ. La alcaldía de San Martín la controla la familia del paramilitar condenado JUANCHO PRADA. ALVARO ESCOBAR dueño de ISMOCOL perfora petróleo y seca ciénagas para sembrar palma en Puerto Oculto, Lebrija, Terraplén, San Rafael dentro de un proyecto de fracking”.

57. “Dicen que no hay paramilitares, pero el pueblo encerró a un grupo de paramilitares rodeando la casa de JUANCHO PRADA. Le pidieron a la fiscalía que actuara, registró la casa y “no encontró mérito” y el coronel Bonilla, comandante de la policía, no hizo capturas”.

58. “Los grupos paramilitares coparon el Nudo de Paramillo desde que empezaron con la construcción de las represas de Urrá asesinaron y desaparecieron a KIMY PERNÍA DOMICÓ líder de los indígenas embera. Hace una semana firmaron el Plan Atrato-Gran Darién que afectará a comunidades de tres departamentos: Antioquia, Córdoba y Chocó. Ya hay 2 mil paramilitares despoblando el Nudo de Paramillo para hacer otra represa, desminar Puerto Libertador y Monte Líbano para incrementar la minería de carbón y níquel que sal-drían a puertos de Urabá”.

59. “Los paramilitares no se fueron de Sucre. Están por todo el departamento y en sur se oponen a la restitución de tierras, son los que gobiernan, amenazan roban, persiguen. Su presencia no da garantías para quienes luchan por la tierra, la paz o los Derechos Humanos”.

60. “Sucre no superó el paramilitarismo que se apropió de la cultura urbana y se metió al as instituciones. YAIR ACUÑA, EMILCE LOPEZ, personajes que dejan una herencia política de extrema derecha violenta que controla la burocracia y el presupuesto departamental para incrementar su riqueza y su poder”.



61. “Los paras están en La Mojana, en Tolú, Asan Onofre, Sampués, Sincelejo... en la finca La Alemania sigue la presión paramilitar. Esas tierras las compró el INCORA para las familias campesinas pero los paramilitares los despojaron, hubo robos, asesinatos, desplazamientos, y abrieron una fosa común en el predio. La gente huyó para todos lados, hasta Venezuela, y regresaron, y no les restituyen las tierras y hay nuevas amenazas de muerte. De 57 familias sólo 9 resisten dentro de ella y sin apoyo del Estado. Hace una semana mataron a un joven dentro de la finca señalado de ser mariguanero, la comunidad queda señalada de ser viciosa, guerrillera y matona. Nosotros no hemos asesinado a nadie y menos dentro de la comunidad. La esposa de ROGELIO MARTINEZ se aguantó el crimen de su esposo, pero este hecho la hizo desplazar”.

62. “Los paramilitares están por La Mojana, se llaman Autodefensas Gaitanistas, se entienden con los militares del batallón Junín y con la policía para proteger las rutas del narcotráfico por el río hasta Córdoba por La Mojana. Los paras amenazaron a la comunidad de Sispataca. Los paras pregonan que ellos se relacionan bien con los acaldes del Golfo de Morrosquillo. Desde las islas de San Bernardo salen lanchas cargadas de droga para Panamá, México, EUA, algunas veces tiene que tirar carga al mar y a los pescadores les pagan por recogerla del agua”.

63. “Toda la Mojana es una base paramilitar, no hay cultivos de coca, pero es un corredor, un área de tránsito con su zona de abastecimiento en Guaranda. La fuerza pública lo sabe ¿por qué no los ataca?”

64. “Un paramilitar alias El Tigrillo contratado por HERNADO ANTONIO MACARENO vinculado a los Lafourie de FEDEGAN asesinó HERNANDO PEREZ IRIARTE el 1º de marzo/16 en un problema de restitución de tierras. La familia de la víctima no tiene defensa jurídica, el sicario sí. No hay garantías, por eso las familias están desistiendo de sus demandas de restitución de tierras como la familia del asesinado HERNADO



PEREZ de la hacienda El Porvenir, municipio de Los Palmitos. En Sabanas de Pedro los paracos patrullan de noche, seis tipos encapuchados, armados, ni la policía ni la Infantería de Marina dicen ni hacen nada”.

#### **4-. DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO**

65. La justicia no avanza en las investigaciones de miles de casos de desaparición forzada de personas. La impunidad es del 99%,

pero el gobierno no acepta la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, alegando que existe un sistema garantista.

66. Son reiteradas las quejas de organizaciones y familiares sobre la persistencia de las desapariciones forzadas, el subregistro de casos y cifras dispares: SIRDEC reporta cerca de 90.000 desaparecidos, de ellas cerca de 24.014 desapariciones forzadas, La UARIV: 46.204 víctimas y la Fiscalía General de la Nación 116.000 procesos acumulados por desaparición forzada al mes de agosto/16.

67. En Colombia hay “muchos registros con diferentes resultados y poca posibilidad de controlarlos, unificarlos y tener una imagen completa, se requiere un claro esfuerzo para tener un registro único o al menos registros interconectados que ofrezcan información sobre la totalidad del número de desaparecidos, y sobre cuántos fueron encontrados vivos o muertos”.

68. “La desaparición forzada de personas sigue existiendo con impunidad. ALEJANDRO URIBE CHACÓN fue desaparecido por paramilitares. El complejo de ciénagas desde puerto Boyacá-Tamalameque-El Banco están siendo secadas para los terratenientes mediante la violencia paramilitar”.

69. En varias regiones de Colombia continúa el desplazamiento forzado, confinamiento y restricciones a la movilidad de las personas en departamentos como Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca. HRW calcula en 35 mil las personas desplazadas en el 2015 y de ellas cerca de 14 mil serían personas de los pueblos indígenas wounnan, emberá y emberá dovida, comunidades negras y campesinas.

70. La cifra de personas desplazadas descendió entre el 2015 y el 2016.

## **5-. PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. TORTURAS, TRATO CRUEL INHUMANO O DEGRADANTE**

71. Colombia sigue sin superar la situación ilegal en las penitenciarías que llevaron a la Corte Constitucional a declarar la emergencia carcelaria.

72. La Delegación Asturiana pudo entrevistarse con cerca de 30 prisioneros políticos integrantes de las guerrillas FARC-EP y ELN reclusos en la cárcel de Picalaña en Ibagué/Tolima en la que hay sindicados y condenados.

73. Las condiciones de la reclusión siguen, como el año pasado, siendo inhumanas y degradantes. La gran mayoría de estos prisioneros no tienen defensa jurídica, ni asistencia médica, ni acceso oportuno a medicamentos. Sólo hay agua media hora en la mañana y media hora en la tarde, y se incrementó el hacinamiento. Pusimos una acción de tutela ante la justicia y la ganamos, pero estos problemas siguen sin resolverse. Hay 4 baterías sanitarias para 170 presos, pero al menos en esta cárcel no nos toca cagar en bolsas y botar por las rejas, como se hace en otras cárceles. Gracias a Dios por eso”.

74. “Ni los acuerdos ni la paz llegan todavía a las cárceles. Aquí nos siguen dando el trato de enemigos y eso que las FARC ha cumplido sus compromisos, el gobierno no. Es necesario un cambio del régimen interno en las cárceles, por eso hicimos jornadas de desobediencia y huelgas de hambre, para que la Emergencia Nacional Carcelaria cambie estas cosas. A nuestros familiares que vienen a visitarnos se les somete a revisiones intrusivas, están utilizando perros para olfatear partes íntimas; se obstaculiza que veamos a nuestros seres queridos que en muchos casos viajan varios días para vernos un par de horas. Tenemos una visita conyugal de 1 hora cada 15 días, sólo hay seis habitaciones, somos mu-



chos y el tiempo se reduce a 35 minutos, nos tratan peor que a los animales”.

75. “Hay muchas incertidumbres. Sabemos en las noticias que se firmaron unos acuerdos en La Habana, no sabemos más, no sabemos qué pasará con nosotros. Uno se preocupa de ver que están matando mucho sindicalista por velar por los derechos de otras personas. Los ricos sólo esperan es a que la guerrilla les entregue las armas, pero no quieren ceder algo de sus privilegios para la vida de la comunidad. Soy víctima de un montaje judicial y quiero salir en libertad, pero no sé afuera qué me espera”.

76. “Las comunicaciones con el exterior de la cárcel son muy caras. En el expendio -tienda- no hay útiles para el aseo, ni alimentos para obligarnos a comprarle a los que hacen negocio con la comida que es mala, medio cruda, insuficiente, no respetan los menús establecidos, es una comida que nos enferma. El abastecimiento de alimentos es un negocio sucio del director de la cárcel con un capitán de la guardia, por eso no abastecen el expendio, para obligarnos a comprarles. Aquí están oyendo los guardianes esta denuncia y cuando UDS se vayan vendrán represalias, pero toca denunciar esto”.



77. “El trato de los guardianes del INPEC es indigno, cruel, hay tortura psicológica, permanecemos encerrados en las celdas y amontonados más de 15 horas diarias, que es el mismo tiempo que pasamos sin comer ni beber. Hay pocos cupos para trabajar o estudiar y redimir la pena. Nos imposibilitan reunirnos”.

## 6-. VÍCTIMAS. MUJERES. NIÑOS-NIÑAS Y ADOLESCENTES. LGBTI

78. Entre las víctimas hay quejas por la ineficacia de las políticas públicas. “No hay garantías, no se investigan las amenazas de muerte, no se castiga a quienes asesinan dirigentes sociales, crece la ocupación paramilitar en las zonas antes controladas por las FARC; la falta de medidas de seguridad para los líderes y las comunidades; no avanzan las reparaciones colectivas, ni la restitución de tierras, sobre todo en las zonas donde no hay una autoridad que haga cumplir las órdenes judiciales en favor de campesinos-as y pescadores, como en el Magdalena Medio, Centro y Sur de Bolívar y del Cesar, o en La Mojana y en las riveras de los ríos Sinú, Atrato, Magdalena y San Jorge”.

79. En septiembre de 2016, la justicia sólo había dictado sentencias en 4.100 de las más de 93.000 demandas en curso por restitución de tierras.

80. Las cifras de víctimas de Colombia dan una idea de la dimensión de su conflicto armado y social:

7,9 millones: víctimas del conflicto armado, casi la mitad de ellas mujeres. (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UARIV, septiembre de 2016)

6,9 millones: víctimas de desplazamiento forzado. (UARIV)

267.000: homicidios relacionados con el conflicto, en su mayoría de civiles. (UARIV)

4.398: víctimas de ejecuciones extrajudiciales registradas por la Fiscalía General. (OACNUDH)

46.386: víctimas de desaparición forzada (UARIV).

29.622: secuestros (UARIV).

11.062: víctimas de minas terrestres antipersonal y artefactos explosivos no detonados (UARIV)

8.022: niños y niñas soldados utilizados por los paramilitares y la guerrilla. (UARIV)

63: defensores y defensoras de los derechos humanos víctimas de homicidio en 2015, y 24 en los primeros tres meses del 2017, entre ellos líderes indígenas, afrodescendientes, campesinos-as.



81. “Más de 200 familias campesinas fuimos desplazadas en 1993 por la familia Marulanda de la hacienda Bellacruz que usaron a los paramilitares de JUANCHO PRADA para asesinar, desplazarnos. La justicia los condenó, reconoció la propiedad de las tierras a los campesinos, pero no se las devuelven, no hay quien les haga entregar las tierras. No se cumple la orden judicial.”

82. “Hay mucha impunidad, las víctimas no tienen derechos efectivos. La ANUC Sincelejo recuperó tierras para los campesinos que luego volvieron con la violencia a manos de terratenientes que persiguen a la dirigencia campesina hasta casi exterminar la organización. Desde los años 80 van más de cien dirigentes campesinos de la ANUC asesinados: WILLIAM JAIMES TORRES, MARCIAL VILORIA, FELIPE GALEANO... Hubo

masacres contra el campesinado en todo el departamento y no hay justicia. Hay despojos de tierras y los poderosos deben devolver esas tierras a los campesinos de Córdoba, para que comience la reparación individual y colectiva a que tienen derecho”.

83. La violencia sexual y de género son problemas generalizados de la sociedad colombiana, hay poca información sobre los derechos de las víctimas que desconocen los mecanismos de protección y se encuentran con obstáculos para acceder de manera oportuna a servicios médicos y a asistencia legal.

84. Muchos de estos ataques quedan impunes por temor, vergüenza y/o desconocimiento.

85. Hace dos años se tipificó el delito de “feminicidio”, como el homicidio de una mujer debido a su condición de género, norma que es necesario difundir e implementar.

86. En el Acuerdo de Paz suscrito entre el gobierno y las FARC, las partes se comprometen a abordar la desigualdad histórica y las vulnerabilidades de las mujeres y niñas, de la población lesbiana, gay, bisexual, transgénero e intersexual (LGBTI) y de las minorías religiosas y se incorporó una sección sobre los derechos de los indígenas y afrodescendientes que esperan desarrollo.

## 7-. IMPUNIDAD

87. Las ejecuciones extrajudiciales han seguido patrones de planificación, de ejecución y de encubrimiento, que configuran la sistematicidad y evidencian que hay responsabilidades en las cadenas de mando, por encima de las autoridades materiales de agentes de la policía y tropas del Ejército.

88. Sin embargo, la mayoría de condenados son militares de bajo rango, soldados rasos. No han sido juzgados los altos mandos del Ejército y algunos ostentan nuevos ascensos. Sólo once generales fueron llamados en el 2016 a responder por los delitos de sus tropas, pero muchos continúan en sus cargos.



89. Sobre el alcance de la responsabilidad del mando por las acciones ilegales de quienes estaban bajo sus órdenes, responde el director de HRW dijo: “Las evidencias que nosotros tenemos y hemos presentado llegan hasta altos mandos del Ejército, incluido el general Mario Montoya. Otros oficiales contra los cuales hemos encontrado evidencias creíbles de que podrían estar involucrados en falsos positivos son el general Juan Pablo Rodríguez Barragán, que actualmente es el comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, y otros excomandantes del Ejército, como los generales Óscar González Peña y Jaime Lasprilla Villamizar”.



90. No funcionan los mecanismos de control interno del ejército, ni los sistemas de investigación de la Procuraduría General que dejó prescribir las investigaciones disciplinarias contra altos militares por las ejecuciones extrajudiciales.

91. La impunidad en el caso de las ejecuciones extrajudiciales hizo que la CPI se pronunciara: “La Oficina llama a que, de acuerdo con los informes públicos de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, el Estado asegure el suministro de información completa y relevante a dicha Corte sobre los avances en las investigaciones contra oficiales de alto rango en los casos de “falsos positivos”.

92. A mayo del 2016, para 743 personas defensoras de los Derechos Humanos asesinadas, hay 14 sentencias condenatorias, según una base de datos citada por la Embajada de España.

93. “El atentado contra el líder campesino ARGEMIRO LARA va camino de quedar impune porque el fiscal y el cuerpo de investigación para proteger a los paramilitares aducen que el autor de los hechos no iba a atacar porque a su arma le faltaba un casquillo. La fiscalía de Sucre es una pieza en manos de paramilitares”.

94. “La fiscalía dio -en el 2016- resultados positivos, por ejemplo, las cuatro sentencias condenatorias por las masacres del Alto Naya y están en marcha estrategias que mejorarán las investigaciones de los delitos contra defensores-as de los Derechos Humanos”.

## 8-. PUEBLOS INDÍGENAS. POBLACIONES AFROCOLOMBIANAS, NEGRAS, PALENQUERAS Y RAIZALES

95. En Colombia la población indígena está en alto riesgo de extinción, por la persecución a sus dirigentes, la pobreza, que es más alta entre la población indígena, la exclusión, la violencia asociada al conflicto armado interno y a proyectos de inversión, el narcotráfico, la usurpación de sus territorios por colonos y por la concesión de licencias mineras.

96. La ACIN reportó en junio/16 el asesinato de 16 de sus integrantes en Caloto, Caldono, Almaguer y El Tambo/Cauca.

97. “Los derechos de los indígenas y afrocolombianos, que incluyen la consulta previa, libre e informada, a menudo se presentan como obstáculos al progreso en lugar de un medio para la promoción del desarrollo sostenible y la paz. En varias situaciones, algunos funcionarios del Estado siguieron sin tratar en la práctica a las autoridades indígenas como parte del Estado a pesar de estar reconocidas como tal en la Constitución Política y no respetaron su derecho al auto-gobierno”.

98. El Instituto Nacional de Salud informó que entre la población indígena wayúu había hasta noviembre 352 casos de niños nacidos con bajo peso y 75 muertes por desnutrición, varios menores de cinco años.

99. “Al menos 30 familias indígenas del pueblo wounan han sido desplazadas de Santa Rosa Guayacán, río San Juan, por los paramilitares Gaitanistas. Lo mismo pasa en el río López de Micay y en río Saija y Timbiquí donde además han desaparecido a miembros de los pueblos indígenas”.

100. La población negra en Colombia se encuentran junto con los indígenas entre la población más pobre, carente de agua potable, saneamiento y servicios de salud.

101. En el Chocó la tasa de mortalidad materna es seis veces mayor que en Bogotá. El gobierno registró 24 casos de muerte por desnutrición de los cuales 7 eran menores de cinco años

102. EMILSEN MANYOMA, líder de las comunidades negras, integrante de la Red CONPAZ, fue asesina-



da por las autodefensas Gaitanistas”.

103. “Hay conflictos por tierras entre indígenas, campesinos y negros. En el resguardo Cohetandó de Páez/ Cauca y el gobierno no interviene para resolverlos, antes nos enfrenta más, como cuando afirma que, si los campesinos que cultivan la coca no la erradican, los que ya lo hicieron no recibirán apoyos”.

## **9-. EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS**

104. El gobierno colombiano ha entregado en concesión grandes extensiones a empresas de sectores como el minero-energético, generando conflictos sociales entre las comunidades y las grandes empresas en departamentos como Antioquia, Caquetá, Huila, La Guajira, Meta, Putumayo y Tolima.

105. “Estamos amenazados por proyectos de inversión que no queremos, como el proyecto de fracking para extraer petróleo; los proyectos agroindustriales para la siembra de más monocultivos de palma africana o para la cría de búfalos para lo que desecan caños, lagunas, humedales, siendo cómplices de los paramilitares Cormagdalena, Navelena y Odebrecht; el proyecto de dragado del río Magdalena que viene secando playones y humedales cientos de kilómetros; los proyectados puertos multimodales de Barrancabermeja, Gamarra, La Gloria, junto con zonas francas como las de San pablo y Regidor, y zonas industriales para el oro y el aceite de palma, además de la autopista 4G que cruzaría desde el Norte de Santander al Magdalena Medio. La Ruta del Sol ha sido un robadero de plata del erario público en la construcción de la vía entre Gamarra, Aguachica, San Roque, Pelaya, en beneficio de Odebrech y donde denunciar la corrupción se castiga con amenazas de muerte. Hay empresarios que son paramilitares, como JUANCHO PRADA y ALIRIO DIAZ que robaron tierras de campesinos y desecan ciénagas con la ayuda de la fuerza pública”.

106. Los sindicatos SINTRAINDULECHE y SINTRAIMAGRA, que agrupan a los trabajadores de Parmalat Colombia Ltda. y del grupo Francés Lactalis, representado por CHRISTIAN HUBERT JACQUES M, denunciaron en un comunicado el despido el 27 de diciembre del 2016 de cinco obreros dentro un plan para acabar con la contratación directa por la multinacional, dejando el área de personal en manos de cooperativas de trabajo asociado y de empresas de servicios temporales, con lo cual destruyen al sindicato y precarizan aún más la calidad de vida de los trabajadores.

107. “La empresa de Servicios Públicos de Aguachica no es legal, da un mal servicio y subieron las tarifas para dar motivos y privatizarla. En San Alberto, privatizarán el agua que es escasa y harán una hidroeléctrica sobre el río San Alberto o río Espíritu Santo”.

108. “En los últimos 50 años Indupalma concentró la propiedad de la tierra en regiones de Santander, Nor-

te de Santander y Cesar; más de 12 mil hectáreas, incluidas tierras baldías ocupadas por campesinos-as. La justicia falló en favor de los campesinos, los paramilitares los acosan para sacarlos, pero no han podido. Indupalma pone murallas para desviar cauces y ha inundado tierras de los campesinos, los aísla poniendo porterías sobre las carreteras públicas entre el corregimiento de Puerto Carreño/San Alberto, y entre la vereda La fragua y Campoalegre”.

109. “En la vereda Estación somos 32 familias presionadas por FENOCO para que nos vayamos porque van a construir una estación para el tren de carbón. Otro desplazamiento porque ya hace un tiempo nos despojaron de todo”.

110. “Las tierras y las aguas están siendo destruidas por la minería, por los puertos multimodales y los monocultivos. Por oponerlos nos convierten en delincuentes, como si fuera delito reclamar los derechos. No estamos contra el desarrollo, pero discutimos qué desarrollo y para quiénes”.

111. “Las zonas de reserva campesina son legítimas porque están en la Ley 160/94 como mecanismo de reordenamiento de la propiedad, pero las estigmatizan para no darle espacio al campesinado, violándose el Artículo 311 de la Constitución Nacional. En cambio, la ley ZIDRES facilita tierras baldías de la nación para las grandes empresas”.

112. “La minería, legal o no, está haciendo un gran daño ambiental y a las personas en regiones como Mercaderes, Florencia, río Patía, río Sambingo. Las personas que se oponen a la minería están siendo asesinadas”.

113. “El puerto multimodal del corregimiento Capulco de Gamarra/Cesar desplazó a comunidades campesinas antiguas en la zona. Llegó la multinacional COALCOR y la Inter American Coal S.A. desaparecen como comunidades Cascajal y Acapulco. Están secando las ciénagas que son el pulmón del río, los criaderos de peces y caimanes. En ese puerto de Gamarra tienen propiedades el padre y un hermano de GINA PARODY...”.

114. “INDUPALMA tiene más de 3.800 trabajadores en estado de precariedad laboral, la empresa prefiere pagar multas que vincular con contratos a término indefinido”.

115. “La Colosa es un proyecto de minería de oro a cielo abierto que cubre zonas del Tolima y del Quindío y que se complementa con la construcción de dos micro centrales eléctricas, dos complejos mineros en los



páramos de Anaime-Chili-Barragán, y en el parque Páramo de los Nevados. En esas zonas nace el río Coello y otras fuentes que abastecen de agua a ciudades como Ibagué, Coello, Espinal, y un distrito de riego de 40 mil hectáreas para agricultura. La población se opone a la mina y se ha enfrentado a la Anglo Gold Ashanti, empresa que ha pagado al ejército colombiano en convenios sumas superiores a los 20 mil millones de pesos para proteger sus intereses. Donde aparece AGA hay violencia en el territorio, lo mismo que en otras zonas donde hay concesiones mineras. No aceptamos que Bogotá decida por los pueblos el desarrollo, para nosotros la prioridad es el agua, la soberanía alimentaria, no la mina. Haremos uso de que Colombia reconoce el derecho de los pueblos a definir por consulta el uso del territorio. El asesinato de PEDRO CESAR GARICA MORENO en septiembre del 2013 después de liderar un paro cívico muestra hasta pueden llegar contra los ambientalistas. Como la controversia llegó al espacio político la AGA financió su propio candidato a alcalde. Quiere el control económico y político de Cajamarca”.



## **10-. DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES**

116. Colombia crece económicamente se queda en pocas manos pues es uno de los países más desiguales del mundo.

117. Se ha producido un gran deterioro de los derechos laborales, según denuncian los sindicatos de la CUT. Algo que se suma a la persistencia de violaciones de los Derechos Humanos (15.000 reportadas por la ENS), a las nuevas leyes de seguridad ciudadana y al

nuevo Código de Policía, al parecer pensadas para reprimir la legítima movilización ciudadana. Persiste la violencia antisindical, en un 99% impune, y existe un alto grado de sub-contratación laboral como mecanismo de la patronal para evadir obligaciones como el pago de prestaciones sociales, lo que repercute en bajos salarios y en el empobrecimiento de la clase obrera, a pesar de las promesas del gobierno colombiano en las Asambleas de la OIT.

118. “En el INCODER el gobierno cometió una masacre laboral, liquidó al Instituto y despidió masivamente a los funcionarios, incluidos los que estaban amparados por el llamado retén social, como sindicalistas

protegidos por el fuero y madres cabeza de familia. El gobierno despidió a sus funcionarios expertos en el problema de tierras que es el mayor del país. Dejó la respuesta al conflicto agrario en manos de los poderes de facto locales: terratenientes, paramilitares, empresarios, lo cual es una condena a desplazamiento o muerte para las comunidades, y es otra desgracia para el país”.

119. “La corrupción mata más gente que la guerra. Siguen siendo saqueados los recursos para la educación y la salud públicas. A los maestros y a la misión médica se les ataca dizque por ser aliados, cómplices e informantes de las guerrillas, pero es en realidad un pretexto para eliminar a personas que denuncian la violencia y la corrupción”.

120. “La prensa independiente es perseguida. Y hay una censura colectiva en las comunidades silenciadas por el miedo. El derecho a la información no existe. Hubo y hay sectores de la prensa aliada con paramilitares, con empresarios y con victimarios... Ese sector del periodismo le debe una petición de perdón a las víctimas de Córdoba”.

121. “En medio del abandono del Estado la coca es la base de la economía de miles de familias campesinas abocadas a una erradicación forzada por el gobierno sin ofrecer alternativas de subsistencia”.

122. “El problema no son los cultivadores de coca, amapola o mariguana, sino la falta de desarrollo, la miseria y el narcotráfico. Se podrían sacar extractos medicinales de estas plantas que no sean estupefacientes. Si durante la guerra tuvimos ingresos ahora nos oponemos a que nos pongan a aguantar hambre en tiempos de paz. Nos oponemos a la sustitución impuesta sin desarrollo estructural del campo”.

123. “En el Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar estamos organizados y tenemos planes de vida locales y propuestas para el gobierno nacional en materias como trabajo, seguridad y soberanía alimentaria, Derechos Humanos, DIH, tierras y territorios, sector minero-energético, inversión social, y también tenemos mecanismos de seguimientos y movilización porque el gobierno no cumple lo que pacta, ni atiende los reclamos de las comunidades. Viendo lo que pasa en otras regiones afirmamos que no hemos sido desplazados de nuestro territorio porque estamos muy organizados. Arenal y Morales forman parte de una Zona de Reserva Campesina lograda con la movilización, pero quieren arrebatarla con señalamientos de que somos de la guerrilla, manipulando a las juntas comunales para dividirnos, por intereses políticos y económicos. Tenemos la emisora comunitaria de radio La Negrita Estéreo y también nos la quieren robar”.

124. “La comunidad es la que hace las escuelas y la que recoge la plata para pagar profesores, porque el Estado no aparece sino para perseguirnos. Muchos niños reciben clases a la sombra de los árboles, en esos sitios no hay nada, ni luz, ni apoyos pedagógicos, ni médico, ni un sanitario, mucho menos un laboratorio. En salud estamos muy mal en las cabeceras municipales y peor en los corregimientos y zonas retiradas, sin médicos, sin

dotación, no hay nada”.

125. “Estamos afectados por los cultivos de palma que son un desierto verde. Unas dos mil personas vivíamos de la pesca hasta que empresarios nos secaron unos 400 kilómetros cuadrados de ciénagas para sembrar palma dejándonos en la miseria absoluta y sin alientos en Regidor/Bolívar, San Cayetano, El Piñal, Papayal, Caimital. Los paramilitares del Bloque Central Bolívar hicieron masacres Entre 1998 y 1999 con más de 200 muertos para que empresarios como los hijos de Uribe Vélez Gerónimo y Tomás Uribe dueños de la finca Palmeras de Regidor, entraran a la zona. Cada año 300 jóvenes salen graduados como bachilleres y no pueden seguir estudios, les queda irse para los paras o para la guerrilla o con el ejército. Hace falta un centro regional universitario”.

126. “En Caño Hondo-Río Viejo/Bolívar, hay problemas con la minería del oro que contamina las aguas con mercurio. Allá los campesinos-as tenían más de 50 años trabajando las tierras y no se las titularon dizque porque eran reserva forestal, pero esas tierras campesinas se las dieron a las mineras sin problema alguno. En Sal Luis-Arenal hay setenta familias campesinas trabajando 1.200 hectáreas de tierras y no tienen título de propiedad y el Estado debiera intervenir antes que haya una desgracia”.

127. “El Magdalena Medio es una región de mucho conflicto por tierras y minería, donde hay una gran concentración de la propiedad de las tierras y donde los latifundistas siguen despojando con violencia a los campesinos-as de sus pequeñas propiedades usando paramilitares que penetraron las instituciones de casi todos los 32 municipios de la región y del departamento del Cesar concesionado a las multinacionales del gas y del petróleo, a las que les viene muy bien los asesinatos de dirigentes sociales y el apresamiento de los opositores de las multinacionales que han sido reconocidos por la Defensoría del Pueblo y por la ONU como población en alto riesgo. Permanecer en el territorio es una lucha diaria”.



128. Los conflictos por los playones o tierras desecadas en ríos, caños, quebradas, lagunas, se resuelven con violencia en favor de los latifundistas. “En esta región hay 44 comités campesinos de la ANUC. Luchamos por el derecho a la tierra que ya trabajábamos en verano para el pancoger, pero mire que ya se secaron las aguas donde pescábamos. Ahora no tenemos nada. Han desecado tierras, dragan, rellenan, la minería ayuda a sedimentar los criaderos de peces. Nuestro problema son los ganaderos de Sucre, que llevan más de treinta años usando la violencia contra los pescadores y campesinos-as de orilla de los ríos Atrato, Sinú, San Jorge, Magdalena. Ellos manejan la justicia, son políticos, funcionarios, fiscales, compadres. Los paramilitares nos cortan las cercas para

echar animales a nuestros sembrados y el ejército que anda con ellos amenaza y juntos desplazan en Sispataca”.

129. “El Comité de Playa Grande denuncia el conflicto por tierras en el que la inspectora y el personero nos quieren quitar las tierras que trabajamos desde hace 37 años. Necesitamos titulación de tierras, pero la institucionalidad está al servicio de particulares”.

130. “El comité de El Limón en la lucha por unas tierras con el terrateniente JOSE PEREZ DE LUIS, tuvo un enfrentamiento con la policía que llegó con motosierras y con mucha violencia. La autoridad sólo protege a los terratenientes”.

131. “El Comité de Punta de Blanco denuncia que estamos en tierras baldías, pero siendo del Estado llegaron unos paramilitares el 3 de febrero y nos quemaron los ranchos, y nos dieron 72 horas para desocupar la zona. Necesitamos la titulación de baldíos en las ciénagas de San Benito”.

132. “El comité Guartinaja-El Pimiento. Nuestros abuelos trabajaron esas tierras por 35 años y los ganaderos se apropiaron, vinieron con paramilitares, nos quemaron las casas, nos desplazaron. Volvimos y hemos pedido la restitución de nuestras tierras, pero eso no avanza. Los ganaderos rompen las cercas, nos echan el ganado al maíz. Donde antes sacábamos el sustento ahora comen las vacas de JAIRO Y EMILSE RODRIGUEZ”.

133. “Comité Villanueva, el predio Las Palmas era una loma sobre una ciénaga, con la sedimentación del río San Jorge se secó la ciénaga donde pescábamos y ahora dieron orden de sacarnos mediante desalojo de las tierras baldías. Es la guerra de los terratenientes contra los pescadores y los campesinos, algunos funcionarios del INCORA y del INCODER, han sido cómplices de los terratenientes”.

134. “Comité Barrial. Denunciamos a JULIO DE LA OSA, por atropellar a nuestra comunidad con la policía y con paramilitares, nos amenazaron de muerte, hace una semana nos picaron los alambres de las cercas y no tenemos para comprar más. Dicen que este año nos matan”.

135. “Comité Caño Palomo. El Estado nunca me dio ni un botón de cacho, y aparece defendiendo a los ganaderos que quieren echarnos de las tierras. Los terratenientes nos quitaron las cercas, no hay con quien quejarse. Nos quieren echar como sea”.

136. “El Estado hace la guerra en las ciénagas en contra de los campesinos-as. Seis encapuchados armados nos atacaron y nos amenazaron de muerte junto con unos funcionarios del Estado. Deben devolvernos las tierras por orden judicial, pero no se cumple la justicia. Tenía 500 árboles de roble y no tenemos nada. No hemos comido pero creemos en la paz. No nos hagan la guerra. ¿Por qué no les titulan las tierras baldías ocupadas a los campesinos organizados?”



137. “Comité de Usuarios Nueva Recuperación, Sispataca. Hay que incidir en el gobierno nacional para que resuelva el problema de tierras que hay con LUIS GIL BADEL y 125 campesinos ubicados en la Ciénaga de Machado, donde ese particular se apoderó de las tierras de sedimentación del río San Jorge. Somos gentes de un pueblo de 800 personas a 27 kilómetros de aquí, por una trocha en mal estado. Vivíamos de la pesca en las ciénagas del San Jorge, pero la mitad ya se sedimentaron y pasamos a ser campesinos-as sin tierra. De manera impune GIL BADEL amenazó de muerte a varios dirigentes campesinos delante del alcalde, los señala de ser guerrilleros, dice que nos va a mandar a los paracos; delante de

funcionarios del INCODER amenazó a la defensora de Derechos Humanos INGRID VERGARA del MOVICE, y a HERNANDO BENITEZ, presidente de ANUC San Benito Abad de quien dice que es de las FARC. A diario nos hace daños, troza alambres, mete ganado a los cultivos de nosotros, nos corta matas de plátano y las tira al río. Hace dos años EVER TRUCO y su hija -que es concejala- nos amenazaron arma en mano. La policía les devolvió el arma. El 16 de julio/16 GIL BADEL metió gente y animales al predio, robaron y mataron a un niño menor y lo tiraron al río. El 13 de agosto/16 el sr. GIL BADEL con el batallón Junín de Montería y civiles armados les destruyeron 300 metros de cercas, y en enero de este año amenazó al dirigente MARCOS LEON acusándolo de cuatrero. Dicen que los paramilitares lo están buscando”.

138. “Aquí la ley son los ganaderos y los paracos apoyados por la policía y el ejército. Somos víctimas del Estado que nos ignora y nos maltrata. Un Estado lento, que no resuelve los problemas de tierras de su propiedad, sino en beneficio de los terratenientes. Ya no tenemos pescado, y nos quitan las tierras de siembra. Somos una comunidad con grave riesgo alimentario”.

139. “Comité Don Antonio, corregimiento de El Limón, ciénaga de Cholé. No hay justicia. Los terratenientes de la familia DE LA OSA atacan a los campesinos-as, les destrozan los cultivos, amenazan. El 28 de febrero del 2010 se presentan los paramilitares Águilas Negras preguntando por los líderes campesinos, amarraron gente, quemaron casas, se van o los matamos. Pedimos protección y quedamos a la deriva. El 21 de mayo mataron a BETILDA LAMBRANO y a FRANCISCO VIDES, hijo, un joven de 21 años al que torturaron, decapitaron a machete y lo tiraron a la ciénaga. Los funcionarios de la alcaldía, del INCODER, del IGAC, cuidan los intereses

de la familia De la Osa, quedan impunes sus delitos, pero los campesinos-as están procesados por perturbación de la propiedad, homicidio, secuestro. Esto está al revés. El Estado no defiende sus propiedades ante narcoterratenientes que financian las campañas electorales y que tienen el poder político local, y se deja usar para perseguir con medios ilegales a los campesinos sin tierras”.

140. “El comité de El Cedral, somos 22 familias que ocupamos unas tierras que reclama JOSE PEREZ. Estamos rodeados, ofrecen plata por matarnos, gente encapuchada ha estado por allí”.

141. “En la comunidad de El Coco los paramilitares mantienen confinados a los campesinos”.

142. “En la finca La Europa, Ovejas/Sucre, que fue donada por el gobierno a 114 familias campesinas, trabajamos medio siglo, en la última etapa 25 años y un empresario nos quiere echar. El primer desplazamiento de 90 familias nos costó 15 muertos, 6 desaparecidos. Volvimos en el 2002 y hubo bombardeos. Los campesinos habían recuperado unas 90 mil hectáreas y de esas unas 25 mil han vuelto a terratenientes y empresas como Cementos ARGOS. En la Europa el INCORA validó compra-ventas de tierras hechas bajo amenaza. Desde el 2007 los paras llegan con armas y perros, a veces con la policía. Mataron a ALEX MIGUEL CORREA, desaparecieron a una niña de 10 años, quemaron once viviendas campesinas para beneficio de AREPAS DON JUANCHITO, y amenazaron a todos los dirigentes campesinos. El 17 de noviembre atentaron contra ARGEMIRO LARA, y en la audiencia contra HECTOR SAN MARTIN, capataz de la finca que disparó cuatro veces contra el líder ANDRES NARVAEZ REYES, la fiscalía dijo que el ataque no revestía peligro, que no hubo intención de matar y ahí estaba que seguía vivo, así que queda en un delito simple de lesiones, que es excarcelable”.

143. “En La Europa todo es fruto de la autogestión campesina, escuelas, caminos, casas, los niños reciben las clases en el suelo, no hay muebles. No hay garantías en el territorio. El apoyo de PBI, IPO, la solidaridad asturiana les permite seguir luchando. El 2 de marzo/16 nos echaron con un lanzamiento violento en el que participaron 50 hombres de Corozal uniformados con suéter blanco y machetes, llegaron con motosierras y tumbaron nuestras viviendas apoyados por el ESMAD y la policía nacional. Somos reconocidos como población víctima del conflicto y nos ataca el mismo Estado en nuestra tierra para beneficio de un empresario”.

144. El proceso de restitución de las tierras de La Europa es una carretilla con ruedas cuadradas”.

145. “Somos 90 familias campesinas por reubicar de la finca Las Aguaditas, Morroa, de unas tierras inservibles que compró el gobierno. No hay diligencia en resolverlo”.

146. “En la vereda Medellín, Ovejas, el médico ANTONIO OJEDA TORREGROSA hizo campaña por OSCAR IVAN ZULUAGA, como ganó Santos se llenó de ira y casi mata a un niño que le tiró una piedra al carro, lo tiró al suelo y lo encañonó, dijo que lo iba a matar para que no fuera bandolero de grande. La familia pidió

clemencia y lo dejó. Denunciados los hechos la justicia no encontró méritos contra el doctor”.

147. “Corregimiento El Piñal. Hemos vivido de todo, masacres, asesinatos de líderes, y creamos una asociación de campesinos sin tierras, nuestras armas son proyectos y propuestas”.



## CONCLUSIONES

El 2016 fue para Colombia el primer año en décadas con un descenso de la tasa general de homicidios y de la tasa de homicidios en el contexto del conflicto armado interno, fruto del cumplimiento por el gobierno y las FARC del cese bilateral del fuego.

Los Acuerdos de La Habana en su fase de implementación están siendo sometidos a atrasos y renegociaciones, reglamentaciones por el gobierno y nuevas negociaciones en el Congreso de la República. El acompañamiento internacional al cumplimiento de los Acuerdos de La Habana es muy importante, así como el apoyo a la Mesa de diálogo con el ELN en Quito.

Colombia está lejos de vivir en paz. Los territorios que han ido dejando las FARC los están copando los grupos paramilitares que el gobierno ni reconoce, ni combate. En otras regiones hay enfrentamientos entre el ELN, la fuerza pública y los paramilitares.

No hay garantías para la dirigencia social y política de oposición al neoliberalismo. Se incrementaron los ataques mortales a las personas que defienden los Derechos Humanos y a la dirigencia social. Las víctimas, la mayoría en estado de desprotección, eran integrantes de los movimientos sociales y políticos Marcha patriótica, Congreso de los Pueblos, dirigentes campesinos-as, indígenas, negros-as y de la comunidad LGBTI, ambientalistas, estudiantes.

La impunidad sigue siendo estructural. En el caso de los ataques a defensores-as de derechos humanos pasa del 90%. La Fiscalía espera mejorar con sus nuevas estrategias de investigación para estos casos.

La política y la institucionalidad pública para las víctimas arrojan pocos resultados en responsabilidades como la justicia, la protección, la restitución de las tierras, la reparación colectiva. Además, hay nuevas víctimas de desaparición, desplazamiento, homicidio, amenazas cada año.

Los proyectos minero-energéticos, los conflictos por tierras, la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, el desconocimiento de los derechos laborales y sindicales básicos, el incumplimiento por el gobierno de acuerdos-compromisos firmados en las movilizaciones campesinas e indígenas de los últimos años, elevan la



conflictividad social y minan la confianza en las instituciones.

La respuesta desde el gobierno es un uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza pública, que incluye batallones antidisturbios, policía nacional y tropas del ejército con material de guerra enfrentados a comunidades campesinas y a pueblos indígenas inermes, movilizados por derechos, con resultado de personas de la población heridas y muertas.

La situación de ilegalidad en las cárceles se convirtió en crónica. También el alto riesgo de extinción de los pueblos indígenas acosados en sus territorios por agentes políticos y armados al servicio de intereses económicos.

## **RECOMENDACIONES**

### **Al gobierno de Colombia:**

Cumplir con los Acuerdos de Paz de La Habana y disponer lo necesario para dejar firmado un Acuerdo de paz con ELN.

Cumplir los acuerdos y compromisos firmados por el gobierno colombiano con las organizaciones campesinas, indígenas y negras movilizadas en los últimos años.

Perseguir, desmontar el aparato paramilitar y sus estructuras de apoyo político, económico y mediático.

Eliminar la doctrina militar del enemigo interno y depurar la fuerza pública.

Dar garantías efectivas para la vida de la dirigencia social y personas que defienden los Derechos Humanos. Acabar con los señalamientos y con la impunidad que rodean estos ataques.

Aplicarse en la prevención de la violencia de género y en las campañas contra todo tipo de discriminación.

Cumplir sus obligaciones con los pueblos indígenas y con las comunidades negras.

### **A la Cooperación de la Unión Europea, de España y de Asturias.**

Priorizar la financiación de los planes de vida y los proyectos comunitarios, la reconstrucción de los tejidos familiar, social y organizativos rotos por el conflicto y por la exclusión.

## **Anexos:**

### **Siglas usadas**

ACIN, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca

AGA, Anglo Gold Ashanti

ANUC, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos

ASOCIPAZ

ASOINCA, Asociación de Institutores del Cauca

ASTRACATOL, Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima

CICR, Comité Internacional de la Cruz Roja

COCAM

CONGDPA, Coordinadora de Ongs. del Principado de Asturias

CONPAZ ¿

COSAJUCA: Colectivo Socio – ambiental Juvenil de Cajamarca

CPI, Corte Penal Internacional

CSI, Corriente Sindical de Izquierda

CUT, central Unitaria de Trabajadores de Colombia

DAS, Departamento Administrativo de Seguridad

DIH, Derecho Internacional Humanitario

ECOPETROL, Empresa Colombiana de Petróleos

ELN, Ejército de Liberación Nacional

EPL, Ejército Popular de Liberación

ESMAD, Escuadrón Móvil Antidisturbios

ETB, Empresa de Teléfonos de Bogotá

FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

FENOCO, Ferrocarriles del Norte de Colombia

FENSUAGRO, Federación Sindical Unitaria Agropecuaria

HRW, Human Rights Watch

IGAC, Instituto Geográfico Agustín Codazzi

INCODER, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural

INCORA, Instituto Colombiano de la Reforma Agraria





INPEC, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

ISAGEN, empresa de generación y comercialización de energía

ISF, Ingeniería Sin Fronteras

LGBTI, Colectivo de personas lesbianas, gay, bisexuales, intersexuales

MAPP/OEA: Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA

MMV: Mecanismo de Monitoreo y Verificación de los Acuerdos de fin del conflicto con FARC

OACNUH. Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

PROFILCO ;

SINTRAIMAGRA, Sindicato Nacional de

Trabajadores de la Industria de productos grasos y alimenticios

SINTRAINAGRO, Sindicato Nacional de Trabajadores de la industria Agropecuaria

SINTRAINCODER, Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural

SIRDEC, Sistema de Información red de Desaparecidos Cadáveres

SUATEA, Sindicato Unitario y Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias

UARIV, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

USO, Unión Sindical Obrera de los Trabajadores de la Industria del Petróleo

ZIDRES, Zonas de interés de Desarrollo Rural, Económico y Social

ZVTN, Zonas Veredales Transitorias de Normalización

### Organizaciones entrevistadas

ADEMACOR: Asociación de Maestros de Córdoba

ANTHOC, Asociación de Trabajadores de Hospitales y Clínicas, seccional Cauca

ANUC, Asociación de Usuarios Campesinos, Municipal Popayán y Montelíbano

Asfaddes, Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, seccional La Gabarra

ASOCAPRI, Asociación de Campesinos y Pescadores del río Lebrija

Asociación Campesina Agropecuaria y de Recuperadores del Playón-río Lebrija

Asociación Campesina de Bellacruz/Agucahica  
 Asociación campesina por el desarrollo del Alto Sinú  
 Asociación de Campesinos de Puerto Oculto-San Martín  
 Asociación de comunicadores y periodistas de Córdoba  
 Asociación de Desarrollo del Alto Sinú  
 Asociación de familiares de profesores asesinados, viudas, huérfanos.  
 Asociación de Mujeres de la vereda La Fila  
 Asociación de Trabajadores Campesinos de Sucre Seccional Morroa  
 Asociación de Trabajadores urbanos y Rurales constructores de paz  
 Asociación de Víctimas por la restitución de tierras  
 Asociación de Víctimas vereda Medellín, Ovejas  
 Asociación Nacional de Reparación Colectiva Córdoba  
 Asociación piscícola del corregimiento de Carrisala  
 Asociación por el desarrollo social de Gamarra por Vivienda Popular  
 Asociaciones Agromineras  
 Asociaciones Campesinas de Finca La Europa, finca Nueva Esperanza, finca La Alemania  
 ASODECAR, Asociación de Capacitación y Desarrollo Humano  
 Asoesperanza  
 ASOINCA, Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca  
 ASOPAZ: Asociación para la Normalización, Verificación y Paz del Occidente de Boyacá  
 ASOVANSEA, Asociación de Vendedores Ambulantes, Estacionarios y Semi estacionarios  
 ASTRACATOL, Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima  
 Centro de Promoción del Desarrollo  
 CNA, Coordinador Nacional Agrario  
 COCAM, Coordinadora de Campesinos cultivadores de Coca, Amapola y Mariguana.  
 Colectivo Campesino y Popular del Cauca  
 Colombia Soberana  
 Comisión de Derechos Humanos de Marcha Patriótica  
 Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar  
 Comisión de relaciones y trabajo político, Comisión de Organización de las FARC  
 Comisión Departamental Veedora y de seguimiento de los Acuerdos gobierno-FARC.  
 Comisión Inter eclesial de Justicia y Putumayo

Comisión Veedora de la región de Icononzo

Comité Ambiental de Cajamarca

Comité Ambiental del Tolima

Comité de Derechos Humanos Procesos Urbanos

Comité de Recuperación de Tierras de Maicito/La Gloria

Comité pro Consulta minera de Cajamarca

Comités campesinos de ANUC procedentes de: Limón, Playa Grande, Cuiba. El Cedral, Caño Palomo, Don Antonio, Sispataca, Punta de Blanco, loma de Medrano, Guartinaja, Villanueva, Rodrigo,

Comunidad LGBTI Sucre

Comunidades de Arboletes y Floral

Comunidades de la Ciénaga de Martinica

Comunidades del Alto San Jorge-Puerto Anchica;

Congreso de los Pueblos

Congreso de los Pueblos

Cooperativa Agropecuaria del Sumapaz

Cooperativa Multiactiva de Arenal/Bolívar

Coordinación Víctimas y Reparación Universidad de Córdoba

Corporación Agrícola y de pescadores del Sur de Bolívar

Corporación Gustavo Marulanda

Corporación Luz para las Víctimas del conflicto armado

Corregimiento de Puerto Acapulco afectados por el puerto multimodal de Gamarra

COSAJUCA

CPDH: Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

CPDH Seccional Bogotá

Cumbre Agraria

Cumbre Nacional Agraria Étnica

CUT Cauca- DDHH

Derechos Humanos CUT Córdoba

DHOC, Fundación por la defensa de los derechos Humanos y del DIH del Oriente y Centro de Colombia

FCSPP, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos



*Milena Quiroz atendió a la delegación asturiana; a los pocos días fue detenida y deportada de la región*

FENSUAGRO, Junta Directiva Nacional y Subcomisión de Derechos Humanos  
FEU, Federación Colombiana de Estudiantes Universitarios  
Frente Amplio por la Paz  
Fundación Cordobexia-DDDHH  
Fundación Desarrollo Integral Mujer y Niñez  
Fundación Franciscana Tomás Moro  
Fundación Mesa Sucreña por la Paz  
Instituto Democracia y Desarrollo  
JAC Junta de Acción Comunal de Tiquicio  
JUCO, Juventud Comunista Colombiana  
Junta de Acción Comunal de La Fila  
Junta de Acción Comunal Villa del Prado  
Juntas de Acción Comunal Veredas: El Sereno, Cañón, San Luis, Nueva Esperanza, Buenavista,  
Justicia y Paz Putumayo  
MAP/OEA/Cauca  
MAPA, Marcha Patriótica  
Mecanismo de Acompañamiento de la Sociedad Civil al MMV  
Mesa de Víctimas  
Mesa Departamental de Garantías de Sucre  
Mesa por los Derechos Humanos en Defensa del Territorio y la vida  
Movimiento de Víctimas de Crímenes de estado, MOVICE, Cauca, Sucre, Sur de Bolívar y Sur del Cesar  
Movimiento Poder Ciudadano  
PCC Cundinamarca  
PDA, Polo democrático Alternativo  
Personas amenazadas de Tierralta y Puerto Escondido.  
Proceso de Unidad del Suroccidente Colombiano, PUSOC  
Programa Manos a la Paz, PNUD  
Red de Derechos Humanos del Suroccidente Francisco Isaías Cifuentes  
Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca  
REDEPAZ, Red de Iniciativas Ciudadanas por la Vida y por la paz  
SIMATOL, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Tolima  
Sindicato Agrario de Icononzo

Sindicato Unitario de Trabajadores del Estado, DDHH

Sintrainagro

Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, defensa de los Derechos de la Mujer

SITRAGRITOL, Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Tolima

UP, Unión Patriótica

Veeduría Ciudadana Aguachica Honesta

### **Instituciones entrevistadas**

Cárcel de Picalaña

Director de la OACNDUH

Embajada de España

Embajada de la Unión Europea en Bogotá

Misión MAP/OEA

MMV Nacional

MMV Cauca

Personero Municipal de Norosí/Antioquia



### **Prensa**

Contagio Radio

Diario Público,

EFE

La Voz de Asturias

Noticias 1

Telesur

Voz

Pacífico Noticias

LNE

El Comercio

Atlética XXII

Rebelión

Asturias Mundial

Kaosenlared

Resumen

Latinoamericano

PrensaIndigena.mx

Punto de Vista

Colectivo de Abogados

Red Jurídica CUTCTC

Info Asturias

La Vanguardia

20 Minutos

Viento Sur

Redher

**SINDICALISTAS ASESINADOS 2016 CUT**  
Colombia

| Nombre                        | Fecha     | Tipo violación | Responsables       | Clase trabajador   | Municipio                   | Deputamento | Sigla_sindical | Confederación |
|-------------------------------|-----------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|----------------|---------------|
| Velasco Belarcazar Ruby Nelly | 09/ene/16 | HOMICIDIOS     | NO IDENTIFICADO    | Trabajador de base | El Charco                   | NARIÑO      | SIMANA         | CUT           |
| Rengifo Gómez Senelia         | 02/feb/16 | HOMICIDIOS     | NO IDENTIFICADO    | Dirigente sindical | La Unión                    | NARIÑO      | SIMANA         | CUT           |
| Silgado Gil de Jesús          | 10/mar/16 | HOMICIDIOS     | NO IDENTIFICADO    | Dirigente sindical | Arauquita                   | ARAUCA      | FENSUAGRO      | CUT           |
| Flórez Víctor Andrés          | 26/mar/16 | HOMICIDIOS     | NO IDENTIFICADO    | Trabajador de base | Corinto                     | CAUCA       | FENSUAGRO      | CUT           |
| Hernández Gutiérrez Oswaldo   | 10/abr/16 | HOMICIDIOS     | NO IDENTIFICADO    | Dirigente sindical | San Sebastián de Buenavista | MAGDALENA   | SINDESS        | CUT           |
| Cotes Jurado Alcides de Jesús | 14/abr/16 | HOMICIDIOS     | DELINCUENCIA COMÚN | Dirigente sindical | Santa Marta                 | MAGDALENA   | SINTRAVALORES  | CUT           |
| Cenen López Diego             | 26/abr/16 | HOMICIDIOS     | NO IDENTIFICADO    | Trabajador de base | Cojibío                     | CAUCA       | ASOINCA        | CUT           |
| Pieruccini Rodríguez Giuliano | 02/jun/16 | HOMICIDIOS     | NO IDENTIFICADO    | Dirigente sindical | Buga                        | VALLE       | UTP            | CGT           |
| Dagua Troches Evaristo        | 29/jun/16 | HOMICIDIOS     | NO IDENTIFICADO    | Trabajador de base | Corinto                     | CAUCA       | FRENSUAGRO     | CUT           |
| Coicue Cecilia                | 06/jun/16 | HOMICIDIOS     | NO IDENTIFICADO    | Dirigente sindical | Corinto                     | CAUCA       | FRENSUAGRO     | CUT           |
| Rodríguez Torres Jhon Jairo   | 01/sep/16 | HOMICIDIOS     | NO IDENTIFICADO    | Trabajador de base | Caloto                      | CAUCA       | FRENSUAGRO     | CUT           |
| Velasco Taquinas José Antonio | 13/sep/16 | HOMICIDIOS     | NO IDENTIFICADO    | Trabajador de base | Caloto                      | CAUCA       | FRENSUAGRO     | CUT           |
| Losada Barreto Didier         | 18/nov/16 | HOMICIDIOS     | NO IDENTIFICADO    | Dirigente sindical | San Vicente del Caguan      | CAQUETA     | FRENSUAGRO     | CUT           |
| Monroy Erley                  | 18/nov/16 | HOMICIDIOS     | NO IDENTIFICADO    | Dirigente sindical | San Vicente del Caguan      | CAQUETA     | CAQUETA        | CUT           |
| Cabrera Cabrera Rodrigo       | 19/nov/16 | HOMICIDIOS     | NO IDENTIFICADO    | Dirigente sindical | Policarpa                   | NARIÑO      | NARIÑO         | CUT           |
| Cortes Froidan                | 23/nov/16 | HOMICIDIOS     | NO IDENTIFICADO    | Dirigente sindical | Buenaventura                | VALLE       | VALLE          | CUT           |
| Veldañó Guillermo             | 12/dic/16 | HOMICIDIOS     | NO IDENTIFICADO    | Dirigente sindical | Puerto Asís                 | PUTUMAYO    | PUTUMAYO       | CUT           |





Soldepaz Pachakuti  
pachakuti.org

Ayuntamiento de Langreo | Ayuntamiento de Llangréu

Izquierda Unitaria Europea / Izquierda Verde Nórdica

Grupo Parlamentario · PARLAMENTO EUROPEO



**GUE/NGL**  
www.guengl.eu